

AUDIENCIA PROVINCIAL A CORUÑA.-
SECCION SEXTA
SANTIAGO DE COMPOSTELA.-

ROLLO NUM. 51/2001
Juzg.Instruc. n° 2
Santiago.-
Sum.1/00

SENTENCIA NUM. 38/03.

ILTMOS.SRS.MAGISTRADOS
DON ANGEL PANTIN REIGADA-Presidente
DON JOSE RAMON SANCHEZ HERRERO
DOÑA CARMEN VILARIÑO LOPEZ.-

EN SANTIAGO, a diecisiete de Octubre de dos mil
tres.-

VISTA en Juicio Oral y Público la causa que con el
núm.1/2000 tramitó el Juzgado de Instrucción núm. 1 de esta
Ciudad, por el PROCEDIMIENTO ordinario y delito de

lesiones, atentado y desórdenes, siendo acusador el Ministerio Fiscal, siendo acusadores particulares Don Luis Luis Gómez Vázquez, defendido por el Letrado Sr. López Fernández y representado por la Procuradora Sra. Sánchez Silva, Don Horacio Yáñez Fernández, don José Fernández Vázquez, don Eugenio Novillo Sánchez, don Rafael Fernández Andrade y don Gerardo López Dopico, defendidos por el Letrado Sr. Antas Pérez y representados por el Procurador Sr. Barreiro Fernández, contra los procesados SIMON VAZQUEZ VALLE, nacido en Santiago (A Coruña) el 1-8-1.978, hijo de José-Manuel y Elena, con D.N.I. 44.817.508; JOSE MOREIRA FERNANDEZ, nacido en Santiago (A Coruña) el 6-9-1.957, hijo de José y María, con D.N.I. 33.221.600; AUGUSTO GOMEZ MALLO, nacido en Santiago (A Coruña) el 5-3-1.969, hijo de Eduardo y Hermitas, con D.N.I. 33.281.607; JESUS MONTOIRO CEPEDA, nacido en Santiago (A Coruña) el 14-8-1.963, hijo de Jesús y Josefa, con D.N.I. 33.265.312; JAIME BEIROA FIGUEIRAS, nacido en Santiago el 12-11-1.937, hijo de José y María, con D.N.I. 33.134.420 y ROBERTO MALLO LIÑARES, nacido en Santiago (A Coruña) el 30-12-1.955, hijo de Manuel y Sara, con D.N.I. 33.237.720, todos ellos vecinos de esta ciudad y defendidos por el Letrado Sr. Nogueira Pol y representados por el Procurador Sr. Regueiro Muñoz, siendo PONENTE EL ILTMO. SR. DON ANGEL PANTIN REIGADA, Presidente de esta Sección.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.-El procedimiento de referencia se incoó por auto de fecha 19 de Junio de dos mil, dictándose auto de procesamiento contra los acusados con fecha 19 de Marzo de 2001, por los hechos que en dicha resolución indican.

SEGUNDO.-Por auto fecha 28 de septiembre de 2001 dictado por el Instructor, se declaró concluso dicho procedimiento que fué remitido a esta Sección y recibido, después de los trámites legales, se dió traslado al Ministerio Fiscal presentando escrito de calificación provisional en el que calificó los hechos como constitutivos de un delito de atentado del art. 550, 551.1 y 552.1 del Código Penal en concurso ideal según el art. 77 con un delito de lesiones del art. 149 y una falta de lesiones del art. 617 del mismo cuerpo legal; un delito de desórdenes públicos del art. 557 del C. Penal, imputando todos ellos a los acusados sin la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal, solicitando se le impusieran las penas a cada uno de ellos, por el delito de atentado 4 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena y por el delito de lesiones la pena de 8 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena; por el delito de desórdenes públicos la pena de 2 años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo

durante el tiempo de la condena, procediendo imponer tambien a Jesús Montoya Cepeda la pena de 6 arrestos de fin de semana como autor de la falta de lesiones.

En cuanto a la indemnización civil los acusados conjunta y solidariamente indemnizarán a Luis Gómez Vázquez en 126.000 Euros y Jesús Montoiro Cepeda indemnizará tambien a Horacio Yañez Fernández en 673 Euros. Costas por sextas partes.

Por la acusación particular que ostenta el Procurador Sr. Barreiro Fernández, tambien se presentó escrito de calificación provisional, calificando los hechos como constitutivos de un delito de atentado del art. 550 del C. Penal en relación con el 552 del mismo cuerpo legal, otro de desórdenes públicos del art. 557 del C. Penal en relación con el art. 514.3, y de seis faltas de lesiones del art. 617 del mismo cuerpo legal, imputando los mismos a los acusados y solicitando se le impusiera las siguientes penas; por el delito de atentado 5 años de prisión y multa de ocho meses, a razón de 30 euros diarios, a cada uno de ellos; por el delito de desórdenes públicos, la pena de tres años de prisión a cada uno de ellos y por cada una de las faltas de lesiones, la pena de multa de dos meses a razón de 30 Euros diarios tambien a cada uno de ellos, accesorias y costas. En cuanto a la indemnización civil los acusados deberán indemnizar, como responsables directos y de forma conjunta y solidaria, en las siguientes cantidades: A Horacio Yañez en 602 Euros; a Gerardo López en 70 Euros; a José Fernández en 516 Euros; a Rafael Fernández en 232 Euros, a Carlos Noya en 627 Euros y a Eugenio Novillo en 602 Euros.

Por la acusación particular que ostenta la Procuradora Sra. Sánchez Silva en nombre y representación de Luis Gómez Vázquez, tambien se presentó escrito de calificación provisional, en el que se calificaron los hechos como constitutivos de: un delito de atentado agravado de los artículos 550, 551-1º y 552.1 del Código Penal en concurso ideal del art. 77 del Código Penal con un delito de lesiones, tambien graves del art. 149 del mismo cuerpo legal, sin perjuicio de las faltas de lesiones; otro delito de desórdenes públicos del art. 557 en relación con el 514 núm. 3 del Código Penal, imputando tales hechos a los acusados, solicitando se le impusiera la pena siguiente: Por el delito de atentado 5 años de prisión y multa de ocho meses a razón de 30 euros diarios con inhabilitación especial para el derecho de sufragio durante el tiempo de condena. Y, por el delito de lesiones nueve años y seis meses de prisión con igual inhabilitación. Por el delito de desórdenes públicos tres años de prisión e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena; accesorias y costas incluidas las de la acusación particular.

En concepto de responsabilidad civil los acusados indemnizarán a Luis Gómez Vázquez las siguientes cantidades: Por gastos según facturas que se adjuntan, 6.860.01 Euros; por días de incapacidad 36.890 Euros; por

las secuelas, 210.354.24 Euros, solicitando que ha de responder directamente en solidaridad con los acusados el Consorcio de Compensación de Seguros.

Por la defensa de los acusados asimismo se presentó escrito de calificación provisional, solicitando su libre absolución.

Igualmente se presentó escrito de calificación por el Sr. Abogado del Estado, oponiéndose a las pretensiones solicitadas por la acusación particular.

TERCERO.-Por auto dictado por esta Sala con fecha 21 de Abril de 2003, se declaraba la pertinencia de la prueba propuesta por las partes, señalándose para el comienzo de las sesiones del Juicio Oral el día 8 de Julio de 2003.-

CUARTO.-Por el Ministerio Fiscal en el acto de juicio oral modificó sus conclusiones provisionales en su conclusión primera en el sentido de que no consta la participación de los procesados Roberto Mallo Liñares y Jaime Beiroa Filgueiras en la concreta agresión sufrida por Luis Gómez Vázquez. En la conclusión segunda se añade en el apartado a), y además de otro delito de atentado de los mismos artículos citados.

En la conclusión tercera, no se sostiene acusación para Roberto Mallo y Jaime Beiroa por delito de lesiones, pero sí por delito de atentado y de desórdenes ya definidos.-

En la conclusión quinta, en el sentido de que se deje sin efecto la pena por delito de lesiones contra los dos procesados citados, manteniéndose en todo lo demás.-

En cuanto a la acción civil de la indemnización a Luis Gómez, responderán los cuatro procesados a los que se acusa de delito de lesiones. Resto a definitivas.

Por la acusación particular ejercida por Luis Gómez Vázquez, se modificaron sus conclusiones provisionales en el sentido de que los gastos que a partir de la fecha se deriven del tratamiento médico que ha de seguir por vida y que se detallen en el trámite de ejecución de sentencia que se dicte. Resto a definitivas.-

QUINTA.-Por las demás partes, incluida la defensa de los acusados, se elevaron a definitivas sus conclusiones provisionales.

HECHOS PROBADOS

Del resultado de las pruebas practicadas en el presente procedimiento, se declara probado:

<< Sobre las 22,00 horas del día 14 de julio de 1998, se concentró en el lugar de Santa Lucía del municipio de Santiago de Compostela y en las inmediaciones de la carretera Santiago-Orense un conjunto de unos doscientos vecinos aproximadamente, que se reunían en protesta contra la apertura al tráfico el día anterior de un carril de circulación que hasta entonces había permanecido inutilizado. A medida en que iba transcurriendo el tiempo, numerosas personas de las reunidas procedían a cruzar en grupo la calzada de un lado a otro con el fin de obstaculizar la circulación, a ocupar parcialmente la calzada o a realizar gestos a los conductores para que se detuvieran, lo que provocó que se produjeran de forma discontinua interrupciones momentáneas en la circulación, que se reanudaba sin que se llegaran a producir retenciones significativas ni más incidentes que algún altercado verbal entre vecinos y algún conductor. Se encontraba en el lugar de la concentración un dispositivo de la Policía Nacional de la Comisaría de Santiago de Compostela, compuesto por dos oficiales y seis agentes, quienes de modo dialogado y sin usar fuerza trataban de controlar las protestas y de evitar que surgieran incidentes entre los manifestantes y los conductores o situaciones de peligro para la circulación. Estaba más alejado del lugar de la concentración otro grupo de policías de número análogo perteneciente a la Unidad de Intervención Policial de A Coruña.

En un determinado momento y tras una reunión del grupo de concentrados, se destacó de éste un conjunto de unas 80 ó 100 personas aproximadamente, que comenzaron a caminar en sentido Orense por el carril que motivaba las protestas y que mostraban una actitud más airada. Alguno de sus componentes portaba algún palo, bastón, cayado u objeto similar, pero sin que conste que tal porte fuera numeroso o generalizado o que se hubiera blandido tal tipo de objetos de forma agresiva frente a los agentes. Igualmente, de este grupo surgían voces agresivas o insultantes hacia los agentes, con expresiones tales como "os vamos a matar", "hijos de puta" o similares, pero sin que se percibiese la situación por los agentes como particularmente agresiva o peligrosa, más allá de los gritos o conductas que en ocasiones se producen en este tipo de protestas, por lo cual el dispositivo policial de la Comisaría de Santiago se situó flanqueando a los manifestantes y espaciándose entre sí los agentes, para impedir situaciones de peligrosidad que pudieran surgir con los vehículos que se aproximasen y sin adoptar medidas de protección especiales, tales como empuñar sus defensas, dotarse de cascos u otros elementos análogos o avisar al otro grupo de policías.

El grupo de manifestantes referido procedió posteriormente a volver hacia el lugar inicial, quedando situado junto a la parte más rezagada del grupo el agente de policía LUIS GOMEZ VAZQUEZ (n° de carnet profesional 44.683), que en un momento en que estaba de espaldas al grupo recibió dos empujones cuando circulaban vehículos cerca de él, que no generaron desplazamiento o peligrosidad real para el policía, ante lo cual el policía se volvió hacia el grupo de unas diez personas que estaba próximo y dijo ``tranquilos``, ``tenemos la fiesta en paz`` u otra expresión análoga. El menor RUBEN MARQUEZ, que estaba inmediatamente próximo al agente, se comportó entonces de forma agresiva, al hacer ademán de abalanzarse sobre el agente al tiempo que él y personas de ese grupo proferían insultos o expresiones del tenor antes descrito. Se produjo un intercambio de palabras entre el agente, el menor y el hermano de éste, el acusado SIMON MARQUEZ VALLE -mayor de edad y sin antecedentes penales-, en el que los dos hermanos airadamente decían al agente que dejara en paz a SIMON, que éste era menor de edad, que no tenía derecho el agente a pedirle el carnet y que el menor no había hecho nada, mientras que el agente recriminaba, en términos contenidos, al menor su actitud y pretendía que se identificara, hasta que el menor propinó un golpe al agente.

Acto seguido, el procesado SIMON y varias personas del grupo que estaba inmediatamente próximo, de aproximadamente unas diez personas, procedieron a golpear de modo conjunto, a la vez o sucesivamente, al agente con patadas y puñetazos, en la cara y en el cuerpo, lo que provocó que el agente fuera desplazado desde la zona del centro de la calzada donde se inició la agresión hasta la cuneta, sin que el agente fuese capaz de rechazar a sus agresores, entre los que en ese momento se contaban, propinando puñetazos o patadas al agente, los procesados SIMON MARQUEZ VALLE y JOSE MOREIRA FERNANDEZ, mayor de edad y sin antecedentes penales.

Los demás miembros del dispositivo policial de la Comisaría de Santiago, compuesto por los oficiales Sres. NOYA MUÑIZ (n° 28.179) y YAÑEZ FERNANDEZ (n° 26.194) y por los agentes Sres. LOPEZ DOPICO (n° 65.007), FERNANDEZ VAZQUEZ (n° 61.679), FERNANDEZ ANDRADE (n° 44.563), NOVILLO SANCHEZ (n° 38.551) y VARELA COSTOYA (N° 49.459), al advertir directamente la agresión a LUIS GOMEZ o percibir que se producía un tumulto, trataron de aproximarse hacia donde estaba su compañero y, los que estaban más próximos, de auxiliarlo separándolo de sus agresores. Fueron entonces todos ellos empujados y golpeados por manifestantes -el oficial NOYA MUÑIZ lo fue en la mano, con un palo-, los cuales se concentraban en esa zona en un número de unas veinte o treinta personas aproximadamente y que al agredir varios a la vez a los policías provocaban su caída al suelo o que no pudieran llegar a auxiliar a LUIS GOMEZ.

Éste, por efecto de los golpes, cayó en la cuneta de la carretera, donde varias personas, entre las que estaban los mencionados acusados MARQUEZ y MOREIRA, siguieron propinándole patadas y puñetazos. El oficial HORACIO YAÑEZ fue arrojado por varios de los agresores también a la zona

de la cuneta, llegando a golpear por el impulso con su costado contra un poste de cemento de una finca próxima y a romperlo. Al advertir HORACIO YAÑEZ la situación en que se hallaba LUIS GOMEZ, quien trataba de incorporarse, lo ayudó a separar a sus agresores, hasta que el procesado JESUS MONTOIRO CEPEDA -mayor de edad y sin antecedentes penales-, que formaba parte del grupo agresor, rechazó a golpes a HORACIO YAÑEZ y procedió a descargar varios puñetazos en la cara particularmente violentos contra LUIS GOMEZ, quien quedó conmocionado y caído en el suelo, cesando a partir de ese momento las agresiones.

Los acusados AUGUSTO GOMEZ MALLO, ROBERTO MALLO LIÑARES y JAIME BEIROA FIGUEIRAS, todos ellos mayores de edad y sin antecedentes penales, formaban parte del grupo de manifestantes en el que se encontraban los otros acusados y otras personas que agredieron a los policías, pero no consta que hubieran intervenido personalmente en la agresión a los policías o que hubieran intentado agredirlos. Antes de la agresión o durante su transcurso, el acusado JAIME BEIROA, que portaba algún tipo de objeto contundente, era una de las personas que se distinguían por una intervención más activa en las protestas y en los actos tendentes a la obstaculización de la calzada, y en proferir expresiones como las antes referidas. El acusado ROBERTO MALLO portó en algún momento un palo o barra, que le fue retirada por uno de los agentes sin empleo de fuerza y sin que el acusado mostrara oposición alguna.

Tras el incidente y la evacuación del agente LUIS GOMEZ se mantuvo una situación de tensión, en la que no existieron nuevos actos de violencia ni se produjo carga policial, con esporádicos gritos o exhibiciones de palos u objetos similares por alguno de los manifestantes. La concentración se disolvió hacia las doce de la noche, habiéndose instalado unos veinte minutos antes sobre la calzada una barricada formada por neumáticos ardiendo, sin que conste ni quién lo llevó a cabo, ni la incidencia que ello tuvo para la circulación.

Las lesiones causadas al agente LUIS GOMEZ consistieron en traumatismo craneoencefálico, fractura de huesos propios de la nariz, contusiones en cara, fractura de apófosis ascendente de maxilar superior izquierdo y presencia de cuerpo extraño en reborde infraorbitario derecho, siendo intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones. La agresión ha causado al lesionado una patología psíquica catalogable como síndrome postconmocional, trastorno de estrés postraumático y transformación persistente de la personalidad, que ha precisado y precisa tratamiento psiquiátrico y que ha determinado el reconocimiento de una minusvalía de 67% y un profundo deterioro de su vida en todos los ámbitos (familiar, personal, social y laboral). El lesionado ha estado incapacitado para sus ocupaciones habituales durante 527 días.

HORACIO YAÑEZ FERNANDEZ sufrió contusiones en cara, tobillo izquierdo, abrasiones diversas, lumbalgia postraumática y hematuria. Precisó asistencia facultativa inicial y tardó en curar 14 días, durante los que estuvo incapacitado para sus ocupaciones habituales.

Todos los demás agentes, salvo el Sr. VARELA COSTOYA,

resultaron lesionados a causa de las agresiones sufridas, sin que hubieran precisado más que asistencia médica inicial, habiéndose generado los siguientes periodos de incapacidad o curación: Al Sr. NOYA MUÑIZ, 4 días de curación; al Sr. LOPEZ DOPICO, 3 días de curación; al Sr. FERNANDEZ VAZQUEZ, 12 días de incapacidad; al Sr. FERNANDEZ ANDRADE, 10 días de curación y al Sr. NOVILLO SANCHEZ, 14 días de incapacidad>>.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- La defensa solicitó en su escrito de calificación y en el acto del juicio la nulidad de los reconocimientos en rueda practicados, lo que debe analizarse con carácter previo por razones sistemáticas, al ser preciso para exponer el proceso de valoración de la prueba la depuración de los vicios que pudieran afectar a su validez.

A- La nulidad instada se pide, en primer término, por haberse exhibido a los testigos que intervinieron en las ruedas -todos ellos miembros de la Policía Nacional destinados en la Comisaría de Santiago- fotografías de las personas que iban a ser reconocidas. Sólo consta en las actuaciones, al figurar la diligencia correspondiente en el folio 76 y haberse reconocido así en las actuaciones en todo momento, que el testigo LUIS GOMEZ reconoció en los álbumes de fotografías obrantes en la Comisaría una foto del acusado AUGUSTO GOMEZ MALLO, sin que posteriormente dicho acusado fuera objeto de rueda de reconocimiento por parte del referido testigo o de cualquier otro agente. No existían antecedentes policiales de ningún otro de los implicados y por tanto no hay más posibilidad de que se hubieran examinado fotos de los imputados antes de la práctica de los reconocimientos que la de haberse mostrado a los identificadores las fotografías que se hubieran tomado a las personas a reconocer tras su detención, práctica irregular -por innecesaria en tal tesitura procesal- que ha sido frontalmente negada por todos los testigos que intervinieron en las ruedas y que no hay prueba que confirme, dada la negativa (o las vaguedades en algún caso) con que los agentes relacionados con la investigación respondieron al ser interrogados al respecto, sin que evidentemente se pueda inferir del mero hecho de que los testigos, por su condición profesional, hubieran podido llegar a tener ocasión material de cometer la irregularidad de examinar fotos de las personas que presumiblemente iban a tener que reconocer ulteriormente, o de acudir a examinarlas mientras estaban detenidas en Comisaría, que tales conductas se llevaron a cabo.

Es doctrina jurisprudencial (STS 22/1/2001) que una identificación por fotografías carece de valor probatorio y sólo puede servir para iniciar una línea de investigación, por lo que el hecho de que se practique no invalida, naturalmente, un posterior reconocimiento llevado a efecto de acuerdo con el art. 369 LECr. (en el mismo sentido, STS 15-6-2000, que cita las de 14 de marzo de 1990, 12 de

septiembre de 1991, 22 de enero de 1993, 19 de febrero y 6 de marzo de 1997). En el caso presente, por tanto, el reconocimiento fotográfico del acusado GOMEZ MALLO por parte del testigo LUIS GOMEZ sirvió como punto de partida de la investigación respecto de tal imputado, pero no constituye prueba de cargo ni invalida los posteriores reconocimientos de los que el acusado pudiera haber sido objeto, como por otra parte tampoco lo haría la supuesta inspección previa de fotos o de los propios acusados que la defensa invoca, pues tal supuesta práctica inadecuada quedaría en su caso subsanada por el reconocimiento que ulteriormente se hubiera prestado con las debidas garantías legales.

En este mismo sentido ha de señalarse que el referido acusado GOMEZ MALLO fue reconocido en el acto del juicio por parte del mismo testigo LUIS GOMEZ como una de las personas que lo agredieron, y tal reconocimiento en el plenario, pese a no haberse realizado previamente un reconocimiento en rueda, es un medio de prueba válido y lícito -lo que es predicable de varios reconocimientos practicados en el juicio oral que no fueron precedidos de las correspondientes ruedas- ya que la diligencia de reconocimiento en rueda en la fase de instrucción no es una medida de identificación de carácter necesario (SSTS 29-1-90, 22-11-1994 y 21-2-98) y por ello, como la STS 11-12-2000 expone con claridad, "ninguna norma de la LECr. establece que la declaración de los testigos en el juicio oral referente a la identidad de los autores del delito sólo pueda ser tomada en cuenta por el tribunal de instancia si previamente, durante la instrucción, se practicó una diligencia de reconocimiento con resultado positivo" -lo que en el caso permitió sustentar la condena en una prueba de cargo constituida esencialmente por el reconocimiento prestado en el acto del juicio-, y ello sin perjuicio de la valoración que pueda hacerse sobre el poder de convicción de tal medio de prueba válido, como de cualquier otro reconocimiento o prueba lícita sometidos a la crítica del tribunal. En sentido coincidente, pueden citarse también las STS 1-10-96, 8-11-1996 ó 28-12-1999.

B- La nulidad pedida se fundamenta también en la intervención en las ruedas, junto a las personas objeto de identificación, de miembros de la Policía Nacional. La respuesta del responsable de la Comisaría al oficio remitido para esclarecer la cuestión confirma la condición de funcionarios en prácticas de varias personas que integraron las ruedas, pero puede comprobarse mediante la confrontación de sus nombres con el de quienes conformaron las múltiples diligencias de reconocimiento realizadas, que sólo en las ruedas llevadas a cabo el día 22/4/1999 en las que actuó como testigo identificador el agente FERNANDEZ ANDRADE tomaron parte los agentes en prácticas, por lo que la supuesta irregularidad sólo afectaría a estos concretos reconocimientos y en absoluto puede llevar a la indiscriminada invalidez de todos los reconocimientos que se postula. Además, de los cuatro reconocimientos en rueda practicados en tales circunstancias sólo el referido al

acusado MOREIRA resultó positivo y, por tanto, tiene un contenido inculpativo susceptible de generar material indefensión que pueda fundamentar la nulidad imputada, que no descansa en la vulneración de derechos fundamentales en la obtención de la prueba sino que denuncia una irregularidad procesal que sólo de perjudicar efectivamente los intereses de los acusados podría tener relevancia. Tal invalidez sólo cabría declararla en el supuesto en que la profesión común del testigo y de los integrantes de la rueda determinase una situación de previo conocimiento de todos o varios miembros de la rueda por parte de quien había de llevar a cabo la identificación, pero en el caso presente el testigo FERNANDEZ ANDRADE negó haber visto a nadie que él conociera (distinto de quien reconoció como autor) en las ruedas, y ello es perfectamente posible pues nada se ha probado sobre que estos policías en prácticas (o el único policía que estaba en activo, según el oficio) estuvieran destinados en la misma Comisaría que el testigo, o que el testigo hubiera llegado a conocerlos antes de la rueda de reconocimiento.

En cualquier caso, aun de excluirse del material probatorio la referida identificación, subsistiría, como luego se desarrollará, prueba de cargo suficiente respecto de la persona reconocida en las ruedas afectadas por la pretendida nulidad, por lo que la cuestión resulta intrascendente para la decisión del juicio.

C- Aunque no se haya planteado expresamente, sí que se criticó repetidamente por las defensas la impropiedad de que la localización y detención de dos de los acusados proviniera de una actividad desplegada por el propio perjudicado Sr. GOMEZ y no de investigaciones llevadas a cabo por las unidades policiales encargadas de ella. Es sin duda inadecuado, por las sombras de voluntarismo o parcialidad que ello puede arrojar, que una investigación sea desarrollada por la propia víctima del suceso, pero en el caso presente no es eso lo que ha sucedido. La identificación de los acusados SIMON MARQUEZ y JAIME BEIROA surgió por diligencias policiales en las que no intervino el Sr. GOMEZ y que partían de datos expuestos en el atestado o en las declaraciones policiales que indicaban circunstancias (hermano el primero de un menor que intervino en el incidente; edad y estado físico del segundo) que fundaban la realización de investigaciones para localizarlos; en cuanto al acusado MALLO LIÑARES, consta que se le detuvo tras gestiones policiales (folio 30) con las que no hay dato que relacione al Sr. GOMEZ, pues éste y los demás agentes que desarrollaron la investigación lo negaron, como en los casos anteriores, y sucintamente -como corresponde a la posible confidencialidad de las fuentes- fueron descritas en el juicio oral tales diligencias como las usuales en estos casos, a través fundamentalmente de conversaciones con personas que supieron de los hechos, siendo evidente que este origen impreciso de las diligencias que dieron lugar a la detención de éste y de los demás imputados no invalida el material probatorio aportado, pues ello no supone

quebrantamiento de derecho fundamental o siquiera irregularidad procesal alguna -son en rigor actos preprocesales- ni afecta a la verdadera prueba practicada en el juicio oral; y en cuanto al acusado GOMEZ MALLO, ya se expuso que su identificación se produjo por ser reconocida su fotografía en los álbumes de fotos de detenidos obrantes en Comisaría.

La identificación del acusado MOREIRAS se produjo al ser reconocido en la calle de modo casual por parte del Sr. GOMEZ, de un modo que éste describió de modo coherente a lo largo del procedimiento y que no hay motivo alguno que permita estimar como discrepante de lo acaecido. Se ha querido poner en duda su veracidad por el hecho de la falta de recuerdo preciso por parte del perjudicado del motivo que lo llevó ese día hasta la zona de Santiago donde se encontró con el acusado, pero ello no se estima bastante para desvirtuar la credibilidad del testimonio del perjudicado, pues dado el tiempo transcurrido es comprensible que se retenga en la memoria lo que constituye el dato importante a recordar (lugar y hora aproximada del encuentro y actos posteriores una vez que el acontecimiento trascendente ocurrió) y no otras circunstancias (razón de la presencia del testigo en la zona del encuentro) que pueden ser percibidas por el individuo como intrascendentes y por ello relegadas al olvido.

En cuanto a la identificación del acusado MONTROIRO en el Juzgado cuando acudió a interesarse por la detención de su cuñado, el también acusado MOREIRAS, tampoco se aprecia irregularidad procesalmente significativa, ya que el testigo explicó que su presencia se debía a que su letrado le pidió que lo acompañara -se aludió en el informe al respecto a una relación personal entre ambos por la que el perjudicado trasladó en su vehículo al Juzgado al letrado- y por ello el hecho, sorpresivo, de que viera en el edificio a otro de los implicados no equivale en absoluto a una investigación extraoficial ni implica vulneración de derecho fundamental alguno, sino que constituye un simple dato del que hacer partir la verdadera actuación procesal relativa a la persona reconocida una vez que se denuncia en Comisaría tal percepción del supuesto autor del delito.

SEGUNDO- A- La exposición del proceso de valoración de la prueba ha de partir de lo que -respecto fundamentalmente de las infracciones de lesiones y atentado imputadas- ha constituido el eje del debate en el plenario, como es la determinación de si las lesiones que sufrieron los policías implicados fueron producidas de modo intencionado y voluntario al ser agredidos por los acusados y por terceras personas no identificadas, o si por el contrario las lesiones fueron fruto de la caída al suelo de los agentes al verse envueltos en una situación de avalancha o caída colectiva, tumultuosa y confusa, generada por el agolpamiento de manifestantes al surgir un incidente verbal entre el policía GOMEZ y el acusado MARQUEZ o el hermano de éste.

1- Todas las manifestaciones de los policías que han

testificado en el plenario, manteniendo así lo declarado en la fase de instrucción o en el atestado, son terminantes en atribuir las lesiones que cada uno de ellos y sus compañeros sufrieron a la agresión de que fueron objeto, negando terminantemente que tuvieran el origen fortuito o no intencionado que se postuló por la defensa. Los imputados que admitieron estar en la zona de la carretera cuando ocurrieron los hechos y los testigos que aportaron que manifestaron estar allí, o bien dijeron desconocer el origen de las lesiones sufridas por los agentes -aludiendo a una situación imprecisa de movimiento y caída de gente y negando haber percibido actos de agresión contra los policías- o bien (el acusado MARQUEZ y los dos testigos que dijeron estar próximos a él) aludieron con mayor precisión al movimiento desordenado de la gente congregada como causante de la caída masiva.

Ante esta contradicción esta Sala no alberga dudas sobre que las lesiones sufridas por los agentes fueron ocasionadas de la forma dolosa por ellos reiteradamente imputada. Resultaría inverosímil que dada la condición profesional de los perjudicados, no fueran capaces de distinguir entre una situación accidental de tumulto por aglomeración de gente y una situación de agresión y acometimiento intencionado, lo que la profusión de detalles y especificación de autorías que en el curso de sus declaraciones brindaron desmiente, por lo que sólo una consciente alteración de la verdad por parte de todos los perjudicados podría explicar que atribuyeran las lesiones a una actuación dolosa de los acusados o de otros manifestantes no determinados, y cabalmente ha de estimarse que tal hipótesis es rechazable. No hay motivos ajenos al propio incidente que pudieran incidir negativamente en la veracidad de las declaraciones de los policías implicados y orientar su testimonio de forma perjudicial hacia los acusados. No consta ni se ha alegado que existiera un previo conocimiento o conflicto de intereses entre perjudicados y denunciados que pudiera alterar la veracidad de las declaraciones incriminatorias de aquéllos, siendo significativo que ni antes de este suceso ni después se produjeron actos o incidentes violentos entre policías y manifestantes que pudieran generar un resentimiento o ánimo mendaz de incriminar a los imputados, en cuanto miembros del grupo violento, y resulta adecuado señalar que un supuesto ánimo de favorecer o apoyar las pretensiones indemnizatorias del principal lesionado (LUIS GOMEZ) ante la gravedad del perjuicio sufrido, o de venganza por la intensidad del mal causado a éste, no se acomoda al hecho de que la patología psiquiátrica generada no apareciera de forma evidente en un primer momento -el psiquiatra que lo atendió, Dr. PEREZ, ha informado (folio 350) que el tratamiento comenzó en noviembre de 1998; en el informe forense de 27 de octubre de ese año (folio 133) no se apreciaba patología psiquiátrica- ni era tampoco necesariamente previsible una evolución como la seguida, por lo que cuando se prestaron, en el atestado o en fase de instrucción, por parte de los policías las manifestaciones de contenido incriminatorio luego reiteradas en juicio, este hipotético afán de favorecer al compañero perjudicado

no podía concurrir.

Abundando en ello, la declaración en el plenario del referido psiquiatra dejó expresamente claro que a su juicio la capacidad del lesionado para rememorar los incidentes no se veía afectada por su patología (en síntesis, sus problemas de memoria no afectaban a los acontecimientos anteriores al suceso estresante) y que las manifestaciones de su paciente sobre el suceso eran fiables, sin que de su declaración o informes o de los dimanantes de los médicos forenses se derive sospecha alguna de que el ánimo vindicativo y de reparación de la ofensa que, con tintes patológicos, se atribuye al perjudicado, pueda interferir en la objetividad de sus percepciones y recuerdos sobre cómo sucedió el acontecimiento traumático.

No resulta pues creíble ni explicable que los policías de modo unánime alteren sustancialmente la verdad de lo que percibieron y transformen un supuesto evento accidental en una agresión a miembros de las fuerzas de seguridad, con las graves consecuencias penales que ello implica, mientras que por el contrario la posibilidad de que las declaraciones exculpatorias se vean influidas o determinadas en su contenido por un afán de favorecer a los procesados, con los que los testigos se encuentran unidos por relaciones de vecindad o amistad, aparece como innegable y, tras la percepción directa de la abundante prueba practicada, como una intensa probabilidad.

2- Por otra parte, como corroboraciones periféricas de la credibilidad de esta versión del núcleo esencial del incidente, ha de atenderse, en primer término, a que la versión dimanante de los policías resultó, pese a los desajustes que sin duda cabe apreciar en sus manifestaciones, mucho más explicativa y apta para formar una convicción que la derivada de los acusados y de los testigos que dijeron estar en el lugar del incidente. Los agentes describieron, cada uno de ellos, la percepción del suceso que pudieron aprehender y es dato que habla a favor de su credibilidad que varios de ellos reconocieran que a causa de la gran confusión existente y de lo múltiple del acometimiento de que eran objeto, no eran capaces de reconocer a nadie como autor del suceso, lo que contradice un hipotético ánimo de imputar responsabilidades de forma indiscriminada o arbitraria, y ello es particularmente significativo cuando se trata de las lesiones que sufrieron los agentes distintos de los Sres. GOMEZ y YAÑEZ, que los propios implicados constituidos en acusación particular, -con lo que implica de interés en la condena que se insta- dijeron no ser capaces de atribuir concretamente a los acusados o a persona alguna, a causa de las razones que se acaban de aludir.

Existieron, como se ha referido, aspectos discrepantes en las declaraciones de los miembros de la Policía. Así, el agente LUIS GOMEZ dijo no recordar haber sido agredido con palos o instrumentos similares y describió cómo el oficial YAÑEZ le quitó de encima a un agresor que identificó como el acusado MONTOIRO, pero que fue éste quien luego golpeó a aquél y a él hasta que quedó inconsciente. El policía OVIDIO NOVILLO en cambio dijo haber percibido cómo los

agresores golpeaban a LUIS GOMEZ con un palo, provocando la caída de éste. El agente LOPEZ DOPICO dijo no recordar el incidente verbal previo que LUIS GOMEZ, en cambio, describió con precisión y fue mencionado en otros testimonios de cargo, como tampoco dijo haberlo visto el oficial NOYA MUÑIZ, jefe del operativo, quien a su vez concretó en 3 las personas que golpeaban al agente GOMEZ, mientras que el oficial YANEZ identificó a los acusados MOREIRA y MONTOIRO entre las personas que le agredieron a él e indicó que eran estas dos personas las que golpeaban a LUIS GOMEZ, si bien también añadió al acusado SIMON MARQUEZ, aunque en ocasiones lo aludía como el "menor", con lo que cabría la confusión con el hermano menor de edad de aquél que actuó como detonante del incidente.

No obstante estos y otros desajustes que pueden escudriñarse en las declaraciones, entiende esta Sala que en una situación particularmente confusa y de gran tensión como la producida, en la que las percepciones de los implicados se veían afectadas por la pluralidad de personas intervinientes y por las dificultades de captar lo que ocurría derivadas de los acometimientos de que eran objeto, ha de considerarse normal que las percepciones y recuerdos sean fragmentarios, de modo que no pueda existir una versión que abarque todos los detalles y que incluso puedan producirse contradicciones en aspectos puntuales. Cabe, por ejemplo, tanto que LUIS GOMEZ hubiera sido agredido con un palo en el curso del tumulto sin que pudiera haber sido advertido de modo específico por él o por otros testigos ante la profusión de golpes que recibió, como que el golpe no se produjera y se tratara de una simple exhibición del instrumento o que hubiera sido otra persona la afectada y el testigo confundiera sus percepciones (el policía NOYA MUÑIZ fijó el origen de sus propias lesiones en un golpe con un palo); igualmente, las discrepancias de los testigos sobre el número de miembros del grupo agresor son también perfectamente comprensibles por la misma razón.

La aportación de detalles o concreciones sobre el desarrollo del supuesto tumulto por parte de los acusados o de los testigos que aportaron fue, por el contrario, mucho más parca y escueta y de modo muy similar se insistió repetidamente en la situación de confusión o tumulto, pero sin dar datos mínimamente precisos sobre número de personas, identidades, posición de los policías u otros que permitieran dotar de fuerza de convicción a las narraciones brindadas, siendo destacable la tendencia de los testigos a dar respuestas vagas o a escudarse en su falta de percepción del suceso cuando se preguntaba sobre el modo en que se produjeron las lesiones a los policías.

3- Además, ha de estimarse que la tesis sostenida por las acusaciones resulta claramente respaldada por el elocuente hecho de que prácticamente todos los agentes pertenecientes a la Comisaría de Santiago que formaban el dispositivo de seguridad en la zona próxima a la manifestación resultaron lesionados (salvo el agente VARELA, quien manifestó tener sólo rasguños por la caída) y ello pese a que como resulta de las declaraciones y es además coherente con la descripción previa de los hechos (un grupo numeroso de

personas que camina por el centro de la calzada en forma aproximadamente de columna y que los agentes, espaciándose entre sí, tratan de evitar que invada los carriles de circulación), había de existir cierta distancia entre los agentes, de modo que no estaban concentrados en un punto o zona reducida que hiciera comprensible que cayeran todos ellos por efecto del tumulto accidental que se postula. En igual sentido, no hay motivo comprensible para que la caída masiva afectara únicamente a los policías y no también a los manifestantes, y ninguna prueba existe de que hubieran existido terceras personas lesionadas por efecto del tumulto, habiéndose aludido únicamente por el acusado MARQUEZ y por los testigos que aseguraron estar próximos a él, a haber caído como consecuencia del tumulto, pero sin referirse a ningún manifestante que hubiera experimentado lesión alguna reseñable por la caída.

Ha de expresarse también que aunque no sea imposible o descartable en abstracto que los traumatismos sufridos por los policías YAÑEZ y, sobre todo, GOMEZ puedan tener como origen una caída accidental colectiva -así lo expresaron en juicio los médicos forenses- estima esta Sala, en una crítica racional de la prueba, que es mucho más probable que la pluralidad de lesiones generadas (traumatismo craneo encefálico cerrado, fractura de huesos propios de la nariz, traumatismo facial, contusiones múltiples en cuanto al segundo de ellos) provengan de una agresión reiterada que de una caída que según las declaraciones exculpatorias antes aludidas se desarrollaría de una forma prácticamente puntual e instantánea.

También, y ahondando en la fuerza corroborante de los datos externos y objetivos respecto de la versión inculpativa, ha de apreciarse que la patología psiquiátrica generada al agente LUIS GOMEZ tiene su origen, como se deriva de los informes de los médicos forenses y del psiquiatra que lo trata, en un acontecimiento que es vivido por el sujeto como extremadamente agresivo y peligroso, hasta el punto (como se repitió en juicio) de que el sujeto se ve en una situación en la que cree que de forma inminente y cierta va a perder la vida, lo que origina un impacto psicológico de tal envergadura que, si se produce una evolución negativa, la mente de la persona afectada no es capaz de asimilar, generando alteraciones psiquiátricas patológicas. Aunque de forma prudente los forenses tampoco descartaron que una causa distinta de una agresión física (un tumulto, por ejemplo) pudiera causar semejante incidencia en el psiquismo del afectado, insistieron en que se trata necesariamente de un impacto psicológico brutal, con sensación de muerte, y que el lesionado reiteraba con total realismo que su última impresión anterior a la pérdida de conocimiento era que iba a recibir el golpe que acabaría con su vida. Estima esta Sala que aun cuando una caída masiva pueda llegar a causar semejante repercusión psicológica, debe estimarse que ello ha de corresponder con una situación de tumulto de dimensiones y gravedad tales (ejemplos no faltan, lamentablemente, de sucesos análogos) que el sujeto pueda llegar a sentir un riesgo real e inminente de muerte, pero ello no se acomoda, en absoluto, a una supuesta caída con los extrañamente selectivos

X

resultados lesivos producidos y en la que, además, las declaraciones exculpatorias no apuntan a que el perjudicado LUIS GOMEZ estuviera tras el tumulto aplastado o aprisionado por otras personas que hubieran caído sobre él, lo que es la situación que cabalmente puede considerarse como hipotética causa de la sensación de catástrofe que el perjudicado pudiera haber llegado a percibir en la tesis exculpatoria que se analiza.

Por último, la condición profesional del lesionado hace estimar esperable cierta tolerancia a situaciones de tensión o peligro en las que él pudiera haberse hallado al intervenir en manifestaciones o sucesos similares, por lo que no resulta comprensible que una simple caída, aunque en la misma pudiera hipotéticamente haber quedado malparado, fuese objeto de una vivencia subjetiva con connotaciones tan dramáticas como las que los peritos estiman que están en la base de la evolución patológica seguida.

B- El siguiente paso en el análisis crítico de la prueba, partiendo de la existencia de una agresión hacia los policías que deriva de los anteriores razonamientos, estriba en la ponderación de si existe prueba suficiente para imputar a cada uno de los acusados una intervención directa o material en aquélla.

Debe puntualizarse, al respecto de este proceso de valoración de la prueba, que las pretensiones más o menos explícitas de los letrados de las acusaciones de derivar de la negativa de los acusados a responder a sus preguntas una admisión tácita de los hechos a los que se referían los innecesariamente prolijos interrogatorios formulados es inconciliable con principios procesales básicos tales como que la culpabilidad no se presume sino que ha de ser demostrada por las acusaciones o que el acusado tiene el legítimo derecho a negarse a aportar datos que puedan valorarse en su perjuicio en el curso de las diligencias de prueba propuestas por las acusaciones; igualmente ha de dejarse claro que la mención del acta a que los acusados prestaron declaración previo juramento no se corresponde a la realidad, pues lo hicieron obviamente con salvaguarda de sus derechos como imputados.

1-Así, por lo que se refiere a las lesiones sufridas por el agente LUIS GOMEZ, éste tanto en el acto del juicio como en el reconocimiento en rueda válidamente practicado (folio 23) identificó al acusado MARQUEZ como persona que discutió con él al salir en defensa de su hermano y que tomó parte directa en el comienzo de la agresión y que le propinó puñetazos en la cara en ese momento y lo golpeó también cuando el agente se encontraba en la cuneta. A su vez el policía NOYA MUÑIZ en el acto del juicio lo identificó como una de las tres personas que principalmente llevaron a cabo la agresión a LUIS GOMEZ y también el Sr. YAÑEZ lo reconoció en rueda de identificación válidamente practicada (folio 21) y precisó en el acto del juicio, tras aclararse que era a él a quien se estaba refiriendo como el menor que discutía con LUIS GOMEZ cuando comenzó el incidente, que el acusado había golpeado a éste.

Las declaraciones del procesado y de los testigos OSCAR VALLE y ALVARO LOPEZ limitan la intervención del procesado en el altercado a una mera discusión o conversación más o menos acalorada con el Sr. GOMEZ, y tratándose en este caso no de un problema de identificación de alguien que interviniera en el incidente (ello no se discute), sino de atribución al mismo de determinados actos, estima esta Sala que tras la percepción de la prueba y la absoluta seguridad manifestada por los Sres. GOMEZ y NOYA -de menor intensidad en el otro identificador- en la atribución al procesado de actos de violencia hacia aquél y el insuficiente poder de convicción de las declaraciones de los testigos, una vez percibida su declaración en el juicio (no aparecían mencionados en las declaraciones iniciales del Sr. MARQUEZ; poca precisión sobre determinados detalles que parece normal que pudieran conocer, como el contenido de la conversación entre el procesado y el agente; falta a la verdad al negar la existencia de agresiones a los policías) llevan a esta Sala al convencimiento sobre la realización de actos de agresión del procesado hacia el Sr. GOMEZ.

2-Respecto del acusado AUGUSTO GOMEZ MALLO, el perjudicado GOMEZ, aparte de identificar fotográficamente al procesado -lo que no tiene el valor de prueba apta para enervar la presunción de inocencia, como ya se expresó- lo identificó también en el acto del juicio, sin que se haya practicado rueda de reconocimiento en la instrucción. El testigo NOYA MUÑIZ identificó en el acto del juicio al referido procesado como integrante del grupo de manifestantes que mostraba mayor agresividad, pero sin atribuirle actos concretos de violencia. El agente FERNANDEZ VAZQUEZ en el acto del juicio lo reconoció como integrante del grupo del que surgió el acometimiento, pero sin atribuirle tampoco actos agresivos determinados.

El acusado mantuvo a lo largo del proceso que se hallaba en Vigo cuando ocurrieron los hechos. La prueba de descargo aportada para probar la presencia del procesado en otra ciudad se mostró como sumamente inconsistente e inhábil para acreditar tal argumento defensivo. Las manifestaciones de su socio y compañero de trabajo MALLO GONZALEZ, aparte de las dudas que pudiera suscitar la credibilidad de que fuera económicamente rentable para la empresa mantener a varias personas desplazadas durante prolongados periodos en una ciudad situada a una hora de coche, fueron imprecisas cuando se abordaban aspectos periféricos de la cuestión que pudieran dotar de credibilidad a sus manifestaciones (ubicación de la pensión, cómo se pagaba el alojamiento y manutención, quién lo hacía, por qué no hay documentación de gastos que se derivan de la actividad de la empresa y que al parecer eran objeto de liquidaciones de cuentas entre los socios) y, sobre todo, al ser confrontados con la declaración del titular del mesón que según aquél los había remitido al lugar donde en esa época supuestamente pernoctaban se hicieron evidentes las contradicciones (se negó por el Sr. TORRES que remitiera a los clientes a pensiones clandestinas o que alguna de ellas estuviera en la planta baja). Las manifestaciones de este testigo dejaron claro que la factura aportada como prueba

documental no servía para demostrar la imposibilidad de que el acusado estuviera en el lugar de los hechos, pues reconoció que emitía las facturas a nombre de quien se lo pedía pero sin poder asegurar que en todo el periodo al que se extendían esa concreta persona hubiera comido o cenado (sería lo relevante) en su establecimiento. Por último, es llamativa la ausencia de prueba documental o testifical (partes diarios de obra, contratos que acreditaran la razón de su presencia en Vigo, determinación de la persona en cuya casa pernoctaban) que cabe estimar al alcance del procesado, pues desde un mes después de los hechos ya conocía su condición de imputado y podría haber recabado tal prueba que avalase sus tesis defensivas.

Ello no obstante y partiendo de la presencia del procesado en la manifestación y en el grupo que mostraba una actitud más airada o agresiva, la imputación al mismo de intervención penalmente reprochable en las lesiones sufridas por el Sr. GOMEZ exige una individualización y concreción, más allá de una duda razonable, de actos de agresión ejercitados frente a aquél -la presencia en el grupo del que parte la agresión no implica que todos los miembros del mismo fueran agresores o que él interviniera activamente en ella-, y estima esta Sala que por ello la única prueba de verdadero poder incriminatorio viene constituida por el reconocimiento practicado en el acto del juicio por el propio lesionado LUIS GOMEZ, pero ha de tenerse en cuenta a la hora de valorarla que los otros dos miembros de la Policía que con mayor precisión y claridad describieron la agresión hacia aquél (Sres. NOYA y YAÑEZ) no lo identificaron como autor de tales actos, como tampoco los demás compañeros presentes, y que por ello resta a esta Sala un margen de duda, que ha de resolver en beneficio del reo, sobre que la atribución de responsabilidad por el Sr. GOMEZ a la persona que vio en el juicio sea exacta y segura y que no se tratara de alguien que aun hallándose en el lugar de la agresión no tuvo participación directa en la misma.

3-En cuanto al acusado MOREIRA, el mismo fue identificado en rueda de reconocimiento (folio 245) y en el juicio oral por parte del Sr. GOMEZ como persona que lo agredió repetidamente cuando estaba en la carretera y después en la cuneta, realizándose idénticas imputaciones por los policías NOYA y YAÑEZ en los reconocimientos en rueda (folios 247 y 249) y en el plenario; también el agente FERNANDEZ VAZQUEZ en el plenario describió cómo dicho imputado golpeaba brutalmente en la cara al Sr. GOMEZ; y por último, el agente FERNANDEZ ANDRADE reconoció en rueda de identificación al referido acusado como persona con comportamiento violento, sin que en el acto del juicio le haya atribuido con claridad suficiente actos violentos hacia el Sr. GOMEZ. Los testimonios incriminatorios son reiterativos y contundentes en atribuir al procesado actos de agresión al agente GOMEZ, manteniéndose la imputación con igual credibilidad y poder de convicción si se excluyeran los datos dimanantes del último agente reseñado (que es el directamente afectado por la pretendida invalidez de las ruedas antes aludida).

El procesado negó su presencia en la carretera cuando ocurrieron los hechos que provocaron las lesiones y sostuvo que se hallaba en la cuneta contraria, y se prestaron dos declaraciones testificales de descargo (testigos SANCHEZ CALVELO y MUNIN) que respaldaron tal afirmación y que pese a algunos aspectos poco convincentes -la poca claridad que mostró el primero de ellos sobre la supuesta retirada de ambos del lugar (afirmó que se fueron juntos a sus respectivas casas y luego que él se quedó atendiendo su propio establecimiento) o la poco convincente falta de conocimientos precisos del segundo sobre el desarrollo del suceso o de la propia dinámica de las manifestaciones, pese a su cargo directivo en la asociación vecinal- mostraron contenidos sustancialmente coincidentes sobre lo que constituía el núcleo de la aportación probatoria que les incumbía.

Valorada conjuntamente la prueba referida, estima esta Sala que la absoluta seguridad y convergencia de los testimonios inculpativos permiten llegar a un convencimiento sobre la realización por parte del acusado de los hechos imputados. Los agentes mostraron total convencimiento y certeza sobre la intervención del acusado en la agresión y no hay motivo para dudar de la fiabilidad y acierto o de la honradez y sinceridad de su atribución al acusado de tales hechos. Las declaraciones exculpativas, pese a ser comprensible que muestren discrepancias u omisiones a causa del tiempo transcurrido o a la confusión del momento (como también se refirió respecto de las de signo inculpativo) o a que no pueda darse especial significación a la falta de mención de la identidad de sus acompañantes por el acusado en sus primeras declaraciones -al no constar que se le hubiera preguntado específicamente al respecto-, cuentan con el lastre de su dudosa sinceridad al negar la existencia de una agresión a los agentes -lo que se reputa contrario a lo acaecido- y por ello, y en la necesaria ponderación de que obedezcan a un ánimo de favorecer al procesado, han de ser tenidas como claramente insuficientes para contrarrestar el intenso poder de convicción que deriva de la prueba de cargo.

Las referencias a las manchas de sangre que varios policías atribuyeron a la vestimenta del referido procesado a causa del incidente, y la consiguiente identificabilidad del acusado que haría fácil su detención por el delito flagrante cometido, no empece el resultado de la valoración, pues pudo el acusado marcharse momentáneamente, cambiarse de ropa o cubrirse con otra prenda para evitar su identificación.

Al hilo de lo anterior, ha de negarse también poder exculpativo al hecho de que tras el suceso no se procediera a detención alguna, pues dejaron claro los miembros de la policía y en particular quienes tenían funciones directivas en el operativo que la tensión existente y la evitación de nuevos incidentes desaconsejaban la práctica de las mismas y que en todo caso tras la agresión no se pudo advertir en el lugar a los autores de la misma.

4-Es análoga la situación respecto del acusado Sr.

MONTOIRO, pues en rueda (folios 186, 188, 190 y 196) y en juicio los policías GOMEZ, NOYA, VARELA y YAÑEZ lo reconocieron como persona que golpeó, con especial brutalidad, al Sr. GOMEZ, como también lo hizo en juicio el agente FERNANDEZ ANDRADE, lo que aclara el más dubitativo resultado del reconocimiento en rueda (folio 192) que éste llevó a cabo.

Como datos exculpatorios se cuenta con las declaraciones de los testigos NIEVES y CARRO, que como en el caso del procesado anterior dijeron estar al otro lado de la calzada con el acusado cuando ocurrió el tumulto. Aunque algún dato contradictorio puede rastrearse en sus declaraciones (si los procesados MONTOIRO y MOREIRAS dijeron no estar juntos cuando se produjeron las lesiones a los policías, carece de lógica que en el Juzgado el testigo CARRO haya dicho que estaba con el testigo MUNIN cuando cada uno de ellos dos acompañaba respectivamente a los referidos acusados), se reproduce en esencia la situación valorativa que se acaba de exponer respecto del anterior acusado, mostrando la prueba de contenido incriminatorio, por la uniformidad y rotundidad de los testimonios, mucho mayor poder de convicción que la negación de la intervención del procesado dimanante de las declaraciones de los testigos que presentó, en especial cuando los mismos no admiten lo que constituye el núcleo de la materia probatoria, como es la agresión producida contra la pluralidad de policías presente.

Como datos exculpatorios se ha aludido, además, a que la atribución al procesado en el atestado de una tez muy blanca contrasta con sus rasgos y color de piel, propios de una persona acusadamente morena. El dato no resulta significativo, pues cabe que la palidez advertida fuera producto, por ejemplo, de la situación de fuerte intensidad emocional que un suceso violento implica, sin que esta percepción parcial y equívoca pueda primar sobre el claro y plural reconocimiento del que fue objeto en varios momentos procesales.

Se invocó igualmente lo inverosímil de que el procesado, que hasta ese momento no había sido relacionado con el suceso, acudiera al edificio de los Juzgados a interesarse por su cuñado, el acusado MOREIRAS, cuando el mismo se encontraba privado de libertad, propiciando así su propia detención. El argumento no es fútil, pero debe repararse en que el procesado no podía saber que ese día estaba en el Juzgado una de las víctimas del suceso que pudiera reconocerlo o pudo simplemente no pensar en tal eventualidad o estimar que si hasta ese momento se había visto libre de las pesquisas policiales ya no corría peligro de ser reconocido como autor, en especial cuando lo confuso del incidente y la pluralidad de intervinientes podría crear la impresión de que no sería reconocido. Por ello, de tal hecho no puede deducirse que la reiterada identificación sea fruto del error o de la mendacidad.

5- Respecto de los otros dos acusados, BEIROA y MALLO LIÑARES, el Ministerio Fiscal, de forma coherente con el resultado de la prueba, retiró su petición de condena como autores de las lesiones a LUIS GOMEZ, mantenida en cambio

por las demás acusaciones, y al respecto es clara la ausencia de prueba de cargo que permita imputarles la comisión de actos concretos de agresión frente a éste, puesto que las declaraciones inculpativas respecto del primer procesado le atribuyen o bien papeles pseudo-organizativos o de incitación en relación con la protesta pero no necesariamente en el momento puntual de la agresión, y la atribución al mismo de actos de exhibición o uso de instrumentos (palé, bastón) no consta que se hubiera plasmado en la producción de lesiones al Sr. GOMEZ, o a cualquier otro de los policías, por lo que no existe base fáctica para atribuirle participación criminalmente relevante en aquéllas.

Es más débil incluso la imputación respecto del procesado MALLO LIÑARES, que fue reconocido por el agente VARELA COSTOYA como persona que portaba una barra de hierro y que no mostró oposición alguna cuando el citado policía -en una forma que éste describió como persuasiva y sin empleo de fuerza- se la retiró, pareciendo remitir además esta situación a un momento posterior a la producción de las lesiones. El oficial NOYA MUÑIZ, cómo hizo con el acusado GOMEZ MALLO, lo situó como integrante del grupo más violento, pero ha de reproducirse lo antes expresado sobre la insuficiencia de tal dato para imputarle responsabilidades en la infracción de lesiones analizada.

Debe indicarse aquí que la prueba de descargo que ambos acusados plantearon para demostrar que se hallaban en un bar próximo cuando ocurrió la agresión a los agentes y que eran del todo punto ajenos a los hechos enjuiciados no resulta convincente, puesto que por lo que se refiere al procesado BEIROA no es coherente que en su primera declaración mantuviera que en el establecimiento estuvo solo (folio 163) para posteriormente querer mantenerse que durante el prolongado periodo que supuestamente pasó allí estuvo acompañado de forma casi constante por el dueño del establecimiento -que no era quien atendía a los demás clientes según otras declaraciones prestadas en juicio- que testificó a su favor, mientras que por el contrario son reiteradas las manifestaciones (policías NOYA, YAÑEZ, FERNANDEZ VAZQUEZ, VARELA) que en juicio o en rueda lo situaban en el lugar del incidente.

En igual sentido, la prueba de descargo relativa al acusado MALLO LIÑARES no permite un convencimiento sobre su presencia en el mismo bar mientras la manifestación y los incidentes tenían lugar, pues pese a que las declaraciones del procesado y de los testigos MAHIA y RAMOS que presentó son sustancialmente semejantes, es apreciable cierta contradicción en sus manifestaciones sobre un dato accesorio como quién estaba antes en el establecimiento y, sobre todo, el reconocimiento del que fue objeto el procesado por parte del agente VARELA COSTOYA resulta plenamente convincente, pues no fue una percepción visual momentánea o en una situación confusa sino que el testigo y el procesado estaban uno al lado del otro y la existencia de una conversación entre ambos y la actuación realizada por parte del acusado han de llevar a considerar que se trataba de una situación en que era perfectamente posible y lógico captar por parte del agente la fisonomía y

comportamiento de la persona implicada y su traducción posterior en actos de prueba fiables.

6- El Ministerio Fiscal imputa al acusado MONTOIRO la comisión de una falta de lesiones por las ocasionadas al policía YAÑEZ, mientras que la acusación particular ejercitada en nombre de éste y de los demás policías lesionados acusa de la misma a todos los procesados, no formulándose petición de condena por otras lesiones que las causadas al Sr. GOMEZ por parte de la acusación sostenida por éste.

Las declaraciones del referido perjudicado y del Sr. GOMEZ han sido reiteradas en atribuir a dicho imputado, con absoluto convencimiento, una agresión, a puñetazos principalmente, a ambos, impidiendo el procesado a golpes la ayuda que el Sr. YAÑEZ pretendía brindar a su compañero, siendo ambos particularmente expresivos sobre este particular, por lo que la imputación ha de estimarse sustentada en prueba bastante.

En cuanto a los demás acusados, sólo existen datos concretamente incriminatorios de la falta examinada respecto del procesado MOREIRA, a quien los policías YAÑEZ y FERNANDEZ ANDRADE atribuyeron en juicio con claridad y seguridad haber propinado golpes al primero. Sin embargo, la lectura del escrito de acusación formulado en nombre de los agentes lesionados revela que no se atribuye acto individualizado de agresión susceptible de ser considerado falta de lesiones causadas al policía Sr. YAÑEZ por parte del procesado MOREIRA, pues aparte de no precisar el referido escrito de acusación cuáles eran las lesiones causadas remitiéndose incorrectamente a otros documentos sumariales, es determinante que las personas a las que en la narración fáctica se imputan los actos de agresión susceptibles de ser considerados constitutivos de la falta imputada son los componentes de un grupo de unos treinta manifestantes, pero sin que en ningún momento se diga que los procesados-acusados formaran parte de ese grupo agresivo o qué actos de agresión concretos llevaron a cabo, por lo que no existe una imputación válidamente formulada de actos constitutivos de una infracción penal que pueda sustentar la condena del mencionado acusado.

7- La misma acusación particular atribuye también a los acusados la coautoría de sendas faltas de lesiones relativas a cada uno de los demás miembros de la Policía que resultaron lesionados en el incidente, pero -aparte de que es trasladable lo que se acaba de expresar sobre la insuficiencia del escrito de acusación en cuanto no imputa hechos delictivos a ninguno de los procesados- no existe prueba de cargo que permita atribuir a éstos, con la seguridad y precisión exigibles, actos de agresión hacia los aludidos policías que funden tal autoría, pues el hecho de que algunos de los imputados hubieran golpeado a determinados policías no implica que tomaran parte en la agresión a todos ellos, y de igual modo debe repetirse, como se dijo anteriormente, que la presencia de los acusados en el grupo del que parten las agresiones cuya autoría se ha podido determinar, no implica que todos los

miembros del mismo fueran agresores o que cada uno de ellos tuviera participación activa todas ellas, por lo que la imputación ha de decaer.

TERCERO- Los actos que conforme al fundamento jurídico anterior se ha acreditado que llevaron a cabo los acusados MARQUEZ, MOREIRA y MONTOIRO respecto del agente de la Policía Nacional Sr. GOMEZ constituyen un delito de lesiones del art. 149 CP. al haber causado al sujeto pasivo de la agresión una grave enfermedad psíquica.

A-Abordando el resultado causado que el tipo aplicado recoge para cualificar la infracción de lesiones, el mismo ha de reputarse acreditado de forma clara e indiscutible por los informes del psiquiatra Dr. PEREZ y por los informes médico forenses ratificados en juicio. Los mismos reseñan las secuelas psíquicas generadas por la agresión y que definen como trastorno de estrés postraumático y transformación persistente de la personalidad tras experiencia catastrófica, dualidad de secuelas que en el acto del juicio fue precisada por los médicos forenses al expresar que la referida situación de estrés postraumático, al cronificarse y seguir un curso de involución, ha desembocado en la alteración persistente de rasgos fundamentales de la personalidad de la persona afectada, siendo múltiples las consecuencias negativas (falta de adaptación a sus entornos familiares, sociales y laborales; actitud de hostilidad y desconfianza permanentes; sensación de amenaza constante; rechazo hacia sí mismo; emotividad sumamente variable; importante agresividad con riesgo real de conductas heteroagresivas o autolesivas; desinterés por todo lo que le rodea; anhedonia; ideas de ruina; ideación paranoide) que el conjunto secuelar citado genera. Igualmente se aprecia un síndrome postconmocional -que el informe obrante al folio 363 fija como secundario a los traumatismos cerebrales sufridos- y que se traduce en cefaleas, sensación de cansancio extremo, mareos, inestabilidad, falta de tolerancia a los ruidos, alteraciones de la memoria reciente, lagunas mnésicas y de fijación, disminución del rendimiento intelectual y episodios de desorientación.

Tal situación fue estimada por los técnicos como estabilizada y cuyas perspectivas de mejora o evolución positiva han sido vistas, desde una perspectiva del caso concreto, como inciertas, apareciendo incluso datos (el progresivo incremento de la medicación es significativo) que apuntan a su empeoramiento.

La consideración de la patología producida como grave no ofrece duda, pues de un modo crónico y permanente se ha producido un intenso daño al psiquismo de la víctima del suceso, pues como se recoge como conclusión el informe de sanidad obrante al folio 366, se ha generado una grave situación de deterioro de la personalidad y un severo deterioro de la vida del paciente en todos los ámbitos, lo que los testimonios de las personas de su círculo familiar

X

más próximo y los datos sobre su vida laboral (declaración de minusvalía y situación de segunda actividad por insuficiencia de sus aptitudes psicofísicas) confirman plenamente.

Cabe citar, en apoyo de la tipificación postulada por las acusaciones -sobre lo que no existió polémica real en el juicio- que las STS 8/5/90 ó 20/2/2003 consideraron, respectivamente, como supuestos de hecho para la aplicación de la tipificación agravada de lesiones -comprendida en el término "imbecilidad" antes empleado por la norma- un "síndrome psíquico postconmoción cefálica con manifiesto deterioro mental y graves lagunas amnésicas" que le imposibilitan para el ejercicio de toda actividad laboral normal o "un profundo síndrome depresivo postraumático", lo que constituyen patologías asimilables a la sufrida por el acusado.

B- La existencia de una relación causal entre los actos llevados a cabo por los acusados y el referido resultado se deriva, con claridad, de los informes médicos ya mencionados, que consideraron idónea para causar el resultado patológico generado una agresión plural y reiterada como la que es objeto de enjuiciamiento.

Se hicieron referencias en el plenario a un posible fondo patológico o especial sensibilidad del acusado respecto de situaciones amenazantes derivados de sus vivencias cuando estuvo destinado profesionalmente en el País Vasco -lo que pudiera haber incidido o coadyuvado en el curso causal-, pero fueron tajantes los técnicos en descartar que se hubiera apreciado algún tipo de patología psiquiátrica o de cualquier tipo previa en el lesionado, haciendo uso por el contrario los técnicos de tal dato para poner de manifiesto la crudeza y brutalidad con que fue vivida la agresión enjuiciada por parte del lesionado pese a que habría de suponersele habituado a situaciones de tensión en el referido destino profesional precedente.

Desde una perspectiva jurídica, la relación de causalidad natural entre el suceso y la patología psíquica producida también se revela como concurrente al aplicarse el criterio doctrinal y jurisprudencialmente dominante de la imputación objetiva (STS 25-1-1991, 4-11-1992, 6-6-1994, 17-1-2001, 14-10-2002), puesto que la agresión reiterada por un conjunto de personas a otra, con puñetazos y patadas, implica un riesgo evidente, jurídicamente desaprobado, de traducirse en menoscabos de su integridad física o psíquica, lo que determina que el resultado producido deba considerarse incluido en el ámbito del riesgo creado y como realización del mismo, de ahí que el resultado sea imputable a los autores de la agresión.

C- 1) La imputación subjetiva del resultado a los acusados antes mencionados ha de reputarse también concurrente. Para ello se hace preciso sentar ahora -lo que también constituye presupuesto del nexos causal con el resultado que se acaba de analizar- que estamos ante un claro caso de coautoría, en que varios de los manifestantes -y entre

ellos los acusados MARQUEZ, MOREIRA y MONTOIRO- tras surgir un incidente verbal inicial, procedieron, cada uno de ellos, de forma sucesiva o simultánea, a golpear al agente LUIS GOMEZ con patadas o puñetazos, siendo todos ellos conscientes cuando lo hacían que no sólo era cada uno de ellos el que propinaba golpes a dicha víctima, sino que también otros de los manifestantes (los referidos acusados y otras personas) la estaban golpeando a la vez que cada uno de los referidos procesados lo hacía, o lo habían hecho inmediatamente antes, o era inmediato que lo harían después. No estamos, en absoluto, ante una imputación a cada uno de los acusados de un acto aislado e individual de violencia física al que pueda anudarse causal o jurídicamente el menoscabo de la integridad corporal que tal acto singular (uno o varios puñetazos o patadas) se estime probado que pueda haber generado, sino que en dicción de la STS 15-10-2002 relativa a un caso asimilable ``la acción de cada uno de los agresores -en semejante contexto de simultaneidad- contribuyó a hacer posible y a reforzar la eficacia lesiva de todas las demás, dando lugar a un resultado producido y asumido por todos''. Como exponen las STS 25/3/2000 ó 7-11-2001, y en el mismo sentido la STS 11-5-1987, son coautores todos aquellos que realizan una parte necesaria en la ejecución del plan colectivo, aunque sus respectivas aportaciones no produzcan por sí solas el acto típico, y en la agresión en grupo, cuando todos los sujetos emplean contra el agredido una violencia de análoga intensidad, de todos debe ser predicado el condominio funcional del hecho, mientras que el elemento subjetivo de la coautoría, el acuerdo de voluntades, puede ser un acuerdo tácito, lo que ocurre normalmente en aquellos supuestos en los que transcurre un brevísimo lapso de tiempo entre la ideación criminal y su puesta en práctica y consiste en la finalidad de ocasionarle un daño corporal de alcance y gravedad no precisados de antemano, las lesiones que resulten son imputables a todos los agresores de acuerdo con el principio de "imputación recíproca", en cuya virtud se entiende que todos aceptan implícitamente lo que cada uno haga contra la integridad física del agredido.

No consta en el supuesto de autos que existiera una ideación previa compartida por los procesados u otras personas de agredir a los agentes, ni una actuación organizada tendente a ello, pues las alusiones al respecto que se hicieron en juicio por los agentes no se acomodan a la ausencia de incidentes violentos o de agresión física anteriores o posteriores al evento, por lo que aquellas afirmaciones mostraron la apariencia de constituir elaboraciones subjetivas de los agentes y no descansar en una base objetiva que permitiera deducirlo. Ha de entenderse, por el contrario, que surgió de forma espontánea y no premeditada un ánimo compartido por los referidos procesados y por otros manifestantes de golpear violentamente al lesionado Sr. GOMEZ y a sus demás compañeros, focalizándose la violencia del grupo en aquél de forma casual simplemente por haber intervenido en la discusión que sirvió de detonante para la explosión de ira de varios de los manifestantes.

Los acusados llevaron a cabo material y directamente actos de ejecución con el conocimiento de que el carácter conjunto de la agresión implicaba, por la profusión de golpes que se propinaban, un peligro cierto y real de que se causara a la víctima un resultado lesivo grave, por lo que este resultado es fruto de la actuación conjunta y voluntaria de todos ellos, quienes han de ser considerados coautores de la lesión producida.

2) El concreto resultado lesivo producido es imputable a título de dolo eventual a los acusados. La jurisprudencia ha reiterado (STS 30/6/2000, 5/9/2001) que en el Código Penal vigente no es preciso un dolo específico respecto de las formas agravadas del delito de lesiones, bastando un dolo eventual que abarque el resultado lesivo concretamente producido. Como es doctrina jurisprudencial repetida (STS 27/12/1982, 24/10/1989, 23/4/1992, 6/6/2000, 24/7/2000, 26/7/2000) ``quien conoce suficientemente el peligro concreto generado por su acción que pone en riesgo específico a otro y sin embargo actúa conscientemente, obra con dolo eventual pues sabe lo que hace y de dicho conocimiento y actuación puede inferirse racionalmente su aceptación del resultado, que constituye consecuencia natural, adecuada y altamente probable de la situación de riesgo en que deliberadamente ha colocado a la víctima''. El dolo eventual exige (STS 4/6/2001, 31/10/2002 ``la doble condición de que el sujeto conozca o se represente la existencia en su acción de un peligro serio e inmediato de que se produzca el resultado y que, además, se conforme con tal producción y decida ejecutar la acción asumiendo la eventualidad de que aquel resultado se produzca''. En el caso presente los acusados al agredir de forma conjunta y reiterada a patadas y puñetazos al agente de policía Sr. GOMEZ eran necesariamente conscientes y sabedores de que una actuación de tal género, por la profusión descontrolada de golpes que recaía sobre la víctima, implicaba un riesgo cierto y real de causarle lesiones que pusieran en concreto y muy grave peligro su integridad física o psíquica. Es indiscutible la ausencia de un dolo específico y directo de causar la patología psiquiátrica que singulariza el concreto cuadro lesivo generado y que hace aplicable el tipo penal invocado por las acusaciones, pues causar tal concreto mal no podía estar en la mente de los autores cuando decidieron agredir a la víctima y así lo hicieron, pero la peligrosidad desencadenada y aceptada por los autores respecto del bien jurídico protegido fue tan extrema -son significativas las reiteradas alusiones de los policías a que creyeron en un momento inicial que su compañero estaba muerto a la vista de la agresión recibida- que se ha de considerar tácitamente asumida la producción de un resultado concreto que, si bien no es estadísticamente usual o frecuente como se refirió en la prueba pericial forense, desde la perspectiva atribuible al autor no es sino una forma posible (en definitiva, es un trastorno psiquiátrico nacido de la brutalidad de la agresión) de incidencia negativa sobre la integridad de la víctima de una agresión que en su concreto desarrollo, aceptado por los autores, ponía en

riesgo la propia vida del sujeto pasivo de los actos violentos desplegados.

Por todo lo expuesto, procede la condena de los procesados MARQUEZ, MOREIRA y MONTOIRO como coautores de un delito previsto en el art. 149 CP.

CUARTO- El acusado MONTOIRO golpeó al policía YAÑEZ a quien causó las lesiones referidas en el informe médico de alta obrante al folio 130, que no exigieron más que una asistencia médica inicial. Tal resultado le es jurídicamente imputable a título doloso, en aplicación de los mismos argumentos que se indicaron en el anterior fundamento, por lo que ha de ser condenado como autor de una falta de lesiones en virtud de lo dispuesto en el art. 617 CP.

QUINTO- A-1-Los acusados MARQUEZ, MOREIRA y MONTOIRO, al haber empleado golpeado intencionadamente a agentes de la autoridad que se hallaban en el normal ejercicio de sus funciones (controlando y vigilando una concentración vecinal en evitación de incidentes y sin que existiera extralimitación o incorrección alguna de los agentes en el desarrollo ese día de su actuación, como se declaró de forma unánime en juicio por acusados y testigos) cometieron el delito de atentado previsto en el art. 550 CP. en relación con el art. 551.1 CP., pues además de los elementos objetivos mencionados concurrió el elemento subjetivo del injusto de ataque al principio de autoridad, ínsito en el acto de ejercer la violencia contra agentes de policía cuando es precisamente la actuación de éstos como tales agentes de la autoridad y ninguna otra razón o motivo que afectara individualmente o a título personal a los agredidos lo que determinó que se dirigiera frente a ellos el ataque violento.

2-Las acusaciones pidieron que se aplicara la figura agravada de atentado prevista en el art. 552.1 CP. por verificarse la agresión con armas u otro medio peligroso. Ya se expresó (Fundamento Jurídico Segundo-A-2) que el agente LUIS GOMEZ no manifestó haber sido agredido con palos, barras u objetos peligrosos, limitando los golpes recibidos a patadas y puñetazos, sin que haya prueba suficiente en las declaraciones de los demás agentes que permita constatar con claridad que fueron empleados tales medios en las lesiones causadas a los demás agentes, salvo en el golpe con un palo u objeto contundente que el oficial NOYA refirió. No existe constancia de que alguno de los acusados antes referidos hubiera sido el autor del referido golpe o hubiera empleado objeto contundente o peligroso al acometer a los agentes, ni tampoco está debidamente demostrado que los referidos objetos hubieran sido mostrados o esgrimidos por los componentes del grupo que se destacaba como más beligerante o de actitud más airada -la falta de adopción de cautelas defensivas previas por parte

de los agentes, que queda clara a tenor de las manifestaciones prestadas en juicio, así lo hace pensar antes de iniciarse la agresión de forma tal que permitiera apreciar que al emprender o sumarse los referidos acusados a los acreditados actos de acometimiento hacia los policías GOMEZ o YAÑEZ asumieran que tales medios peligrosos iban a ser empleados frente a éstos o frente a los demás agentes que estaban en las proximidades y que permita, en suma, apreciar la concurrencia del elemento cognoscitivo del dolo respecto del uso de tales objetos peligrosos, necesario para la imputación de la figura agravada que se propugna por exigencia del principio de culpabilidad del art. 5 CP. del que es plasmación el criterio recogido en el art. 65.2 CP. para la apreciación de las circunstancias agravantes relativas a la ejecución del hecho o de los medios empleados para realizarla y que es trasladable a las agravantes específicas que dan lugar a subtipos agravados por razón de tales formas o medios de ejecución (STS 14/1/1991, ATS 8-3-2002).

B- Todas las acusaciones han postulado la condena de los demás procesados GOMEZ MALLO, MALLO LIÑARES y BEIROA como autores de una infracción de atentado. Los escritos de acusación, delimitadores del objeto del enjuiciamiento, atribuyen de forma no individualizada a todos los acusados y en lo que puede constituir base fáctica del delito de atentado, aparte de actos de agresión propiamente dicha, comportamientos que se describen como ``increpando y amenazando a los (...) agentes de policía`` (acusación pública) o ``increpando de manera absolutamente violenta (.) a los agentes de policía`` y ``a gritos amenazaban a los policías con matarlos animando a los demás a participar en la agresión, tratando por todos los medios de arrebatarse o quitarle las armas reglamentarias`` (acusación particular del Sr. GOMEZ), mientras que la otra acusación particular imputa en su relato fáctico que ``ante este requerimiento los manifestantes respondieron a dichos Agentes con provocaciones e insultos`` y ``que varios de los atacantes gritaban "vamos a matarlos" al tiempo que animaban a los demás manifestantes para participar en la agresión, que intentaron despojar a los Policías de sus armas``.

1-Desde la perspectiva de la prueba practicada en juicio, ha de apreciarse que respecto del acusado GOMEZ MALLO, al margen de la atribución de actos de agresión que el Sr. LUIS GOMEZ le atribuye y que, como antes se señaló, no se reputa respaldada por prueba suficiente, consta su identificación por parte del agente FERNANDEZ VAZQUEZ, quien en juicio lo reconoció como presente en el incidente violento pero sin concretar participación alguna, y las manifestaciones del oficial NOYA, que también que dijo que estaba en el grupo violento del que partió la agresión a los policías. Como antes ya se dijo, aun cuando el referido grupo se compusiera de aquellas personas que dentro de los manifestantes mostraran una actitud más vindicativa o dispuesta a dar una mayor intensidad a las protestas,

incluyendo en ello la marcha a pie por parte de la calzada, y pese a que conste que fueron varios integrantes de ese grupo, y no sólo las tres personas consideradas autoras, a quienes le son imputables las lesiones conforme a lo antes expuesto, no cabe entender probado que todos las personas que en tal grupo se hallaban tomaran parte en los actos de agresión o acometimiento hacia los policías y no hay prueba suficiente, ni resulta particularmente verosímil, que existiera un pacto expreso o tácito entre ellos para desplegar violencia contra los policías que pudiera permitir atribuirles algún tipo de responsabilidad por aquellos actos violentos. No se ha precisado con suficiencia que tampoco el referido acusado GOMEZ MALLO hubiera llevado a cabo alguna de las concretas conductas que los escritos de acusación precisan, por lo que ha de ser absuelto del delito imputado.

2-Respecto del acusado MALLO LIÑARES, ya se analizaron (Fundamento Jurídico Segundo, B, 5) los datos incriminatorios relativos al mismo y dándose por reproducido lo que se acaba de exponer sobre la falta de fuerza incriminatoria de la imputación dimanante del oficial NOYA, la referencia concreta dimanante de la declaración del agente VARELA no puede ser bastante para encuadrar la conducta enjuiciada en el tipo penal postulado por las acusaciones, ya que esta exhibición de una barra de hierro, aún cuando se tratase de un contexto de tensión, ha de ser puesta en relación con el inmediato abandono de su actitud al serle recriminada su actitud por el referido agente en términos -le dijo ``¿pero qué haces hombre``? o una expresión análoga al tiempo que le retiraba el palo o barra- que no se acomodan a una situación en la que la actuación antijurídica dirigida frente al agente ha de alcanzar un intenso grado de capacidad de amenaza o de real conminación con un mal inminente y concreto (STS 13/6/2001) que permita considerar su conducta como una intimidación grave que es la única que dentro de las comprendidas en el tipo se acomodaría a los actos concretamente atribuidos al referido procesado, debiendo señalarse que la jurisprudencia (STS 25/11/1996, 19/10/1999, 4/5/2001) ha establecido que ``el riguroso tratamiento penal del delito de atentado impone una interpretación del tipo sujeto al fundamento material de su incriminación, contando con la perspectiva del principio de proporcionalidad, lo que obliga a excluir aquellas conductas de menor entidad que ni gramatical ni racionalmente pueden ser calificadas de atentado sin forzar el sentido del término``. Por ello ha de absolverse también al referido acusado de la examinada imputación.

3- Respecto del acusado BEIROA, no puede reputarse demostrada la realización de actos susceptibles de ser encuadrados en el tipo de atentado. Varios de los testimonios incriminatorios hicieron mención a que durante el momento de máxima tensión del incidente el procesado esgrimía algún tipo de objeto contundente (el Sr. NOYA le atribuyó el blandir o exhibir un palé; el Sr. FERNANDEZ VAZQUEZ, un palo o bastón; el Sr. VARELA, un palé o una

caja), mientras que hay testimonios que también le atribuyen (Sres. YAÑEZ o VARELA) una conducta de incitación o de dirección del grupo de manifestantes o (Sr. NOYA) lo sitúan entre los integrantes del grupo en el que se hallaban las personas que llevaron a cabo los actos de agresión.

Con estos datos y con el criterio interpretativo que se acaba de señalar -y debiendo repararse en que los escritos de acusación, pese a haber base en la fase de instrucción para concretar respecto del referido procesado actos de la índole expresada no lo hicieron- ha de estimarse que no hay prueba bastante de que el objeto impreciso (bastón, palo, palé o caja) que portaba fuera empleado por el acusado para golpear o intentar golpear a los policías, o de que su tenencia o exhibición tuviera entidad suficiente -para cuyo discernimiento sería necesario una concreción sobre datos circunstanciales tales como distancias entre el acusado y los policías, tiempo en que se esgrimió el objeto y similares- para constituir un acto de grave intimidación, siendo además muy dispares los testimonios de cargo sobre el número, momento de aparición o empleo de los objetos contundentes que se dijeron ver entre los manifestantes, por lo que tampoco hay base consistente para estimar que se tratase de una situación en que un grupo numeroso exhibiera con decisión objetos contundentes en las proximidades de los agentes produciendo una situación que revistiera el intenso efecto intimidatorio que el precepto exige.

Tampoco los testimonios referidos permiten fundar con solidez una atribución al acusado de un papel directivo en el grupo de agresores -debe repetirse lo indicado sobre la inexistencia de prueba de un plan criminal previamente asumido- y la imputación de un cierto papel particularmente activo no está claro que se refiriese al momento de las agresiones sino más bien a la situación previa centrada en la ocupación de la carretera. En todo caso, la actuación de incitación verbal a los agresores, incluso mediante el uso de expresiones como las referidas en los escritos de acusación, tampoco alcanzaría relevancia para configurar alguna forma de participación criminalmente reprobable en el delito de atentado materialmente cometido por otros procesados, por la vía de ser considerada provocación (art. 18.1 en relación con el 553 C.P.) susceptible de ser castigada como inducción (art. 18.2 último párrafo), ya que para ello la incitación ha de ser directa y fruto de una actuación dirigida a una concurrencia de personas, y en el caso presente el hecho se asemeja más a una actuación de jaleo o apoyar verbalmente una actuación violenta que la de tratar de persuadir o formar en los agresores una voluntad criminal que no consta que se viera influida o mediatizada por el hecho de que algunos de los componentes del grupo de manifestantes profirieran consignas agresivas o gritos de apoyo.

SEXTO- A- Se imputa a los acusados un delito de desórdenes públicos del art. 557 CP. El elemento objetivo de

alteración del orden público mediante alguna de las conductas típicas previstas sólo puede estimarse producido en el caso presente a través de la actuación consistente en causar lesiones a las personas. La otra actuación prevista en el precepto atinente a los hechos enjuiciados, consistente en la obstaculización de las vías públicas, exige que ello se haga ``de manera peligrosa para los que por ellas circulen''. Varios de los testimonios de los agentes aludieron a que existía una situación de riesgo o peligro concretada en la actuación de numerosas personas presentes en la concentración de cruzar la calzada transversalmente o de ocupar carriles de la misma haciendo gestos hacia los conductores para que pararan o increparlos, pero igualmente varias de las manifestaciones de los testigos aludieron a que la situación era la de relativa normalidad propia de concentraciones o protestas análogas a la referida y fueron uniformes los testimonios en describir los cortes de circulación como puntuales o discontinuos, sin que se haya descrito por ningún testigo que se hubieran llegado a producir retenciones significativas de vehículos o llegado a describir alguna situación concreta en la que se hubiera producido peligro para los conductores usuarios de la vía por las obstaculizaciones de la calzada -sólo se aludió al temor producido en una conductora al ser increpada por los congregados, o a enfrentamientos verbales entre conductores y vecinos- debiendo destacarse al efecto que el precepto sitúa como destinatario de la peligrosidad a las personas que circulan por las vías obstaculizadas y no a las personas componentes del grupo que obstruye la vía, por lo que devienen intrascendentes las alusiones de las acusaciones a que había mujeres y niños entre los manifestantes que alteraban así el orden y se aproximaban a los vehículos.

En este sentido los escritos de la acusación pública y del Sr. GOMEZ se refieren a la colocación en la calzada de barricadas con neumáticos ardiendo, lo cual la prueba practicada en juicio ha precisado que ocurrió ya después de acaecida la agresión a los policías y en un momento próximo a que la concentración se disolviera ese día, quedando fuera del ámbito de conocimiento en este proceso otros incidentes análogos que se produjeron (el testimonio del oficial NOYA fue particularmente descriptivo al respecto), en los días sucesivos, al no haberse aludido en los escritos de acusación. Sin duda una barricada ardiendo situada en la calzada es una forma de alteración del orden público apta para generar peligro para quienes circulan por la vía, pero ha de repararse en que ninguno de los testimonios prestados en juicio atribuye a los acusados algún tipo de intervención directa o indirecta en la confección o emplazamiento de la misma, deduciéndose por el contrario de los testimonios más ilustrativos sobre la cuestión, como el antes mencionado, que la distancia entre la barricada y el lugar en que estaban los agentes dificultaba la identificación de los autores de la misma, no habiéndose precisado tampoco cómo este hecho pudo influir en la circulación y en particular si pese a la barricada continuaba la circulación de vehículos con el

consiguiente riesgo, o si el tráfico se detuvo o desvió. A mayor abundamiento, no consta ni se ha mencionado que los incidentes ocurridos los días posteriores -de entidad análoga a la sucedida el día de autos- hubieran dado lugar a la incoación de atestado o procedimiento penal, como sería lógico si los mismos hubieran sido percibidos como constitutivos de delito por su trascendencia.

B- El delito imputado ha de tener, en el caso enjuiciado, la dinámica comisiva de alteración del orden mediante la causación de lesiones a las personas, y está acreditada tal causación y que la situación, objetivamente, implicó una alteración del orden público, un incumplimiento de las normas que regulan la convivencia con menoscabo de valores constitucionalmente protegidos como la libertad y la seguridad en ese concreto lugar y momento, que se ven necesariamente vulnerados por situaciones de violencia dimanantes de la actuación de un grupo. Sin embargo, el precepto no sólo exige que el orden público se quebrante, sino también que ello se realice con el fin de atentar contra la paz pública. Este elemento subjetivo del tipo que configura la infracción como delito de intención no es concepto necesariamente coincidente con el de orden público (STS 19/1/94, 29/11/94). Esta última resolución estima que "paz pública equivaldría al conjunto de condiciones externas que permiten el normal desarrollo de la convivencia ciudadana (o el normal ejercicio de los derechos y libertades públicas) o, más sintéticamente, como normalidad en la convivencia ciudadana" y cita la STS 25/1/1990 por la cual se atenta contra la paz pública cuando se produce "alarma social y perturbación en el seno de la vida ciudadana".

En el caso presente, no aparece con la debida claridad esta tendencia interna de los manifestantes, y en particular de los acusados autores de las lesiones, de llevar a cabo la alteración del orden que la producción de las lesiones comporta -el hecho de que se dirigieran frente a agentes de la autoridad ha de considerarse irrelevante a efectos de la aplicación del presente precepto al castigarse también el delito de atentado, ya que ambas figuras delictivas protegen bienes jurídicos distintos (STS 25/10/2002) que son objeto de tutela penal independiente- con la finalidad de alterar de modo trascendente principios básicos de convivencia, que sí cabría estimar concurrente si el uso de la violencia contra las personas se hubiera planificado o asumido como modo de expresar reivindicaciones -con independencia de la justicia de las mismas-, o de represalia o protesta contra actuaciones de los poderes públicos, o revistiera por sus propias características -en particular por su prolongación o difusión- unas dimensiones tales que implicaran una situación persistente de inseguridad que impidiera el desarrollo normal de la convivencia.

Existen varios datos significativos que no se avienen con la existencia del ánimo tendencial que se examina. Así, como se ha referido, no existieron otros actos de violencia distintos del puntual y breve altercado que dio lugar a las lesiones de los policías, siendo particularmente expresivo

que ni antes del altercado los agentes adoptaron medidas de cautela que habría de estimar normales si el riesgo de violencia o de graves altercados fuera palpable, ni tampoco después del mismo se estimó oportuno la realización de cargas policiales o actuaciones de empleo de la fuerza, y si bien apareció como razonable el criterio de quien dirigía el grupo policial de no querer agravar la situación, el uso de esta discrecionalidad revela de por sí que la tensión o alteración del orden existente no alcanzaba tal relevancia que hiciera necesario el uso de la fuerza para normalizar la situación.

En igual sentido, el desarrollo del juicio no ha permitido formar una convicción sobre que los acusados y el conjunto de personas que intervinieron en la agresión mostraran algún tipo de organización o distribución de tareas o concierto previo entre ellos para la alteración del orden que fuera más allá de la adhesión espontánea al propósito de agresión a los agentes que surgió cuando se produjo un incidente entre uno de éstos y un menor y que desencadenó que la tensión existente -derivada del enfado de los vecinos con lo que consideraban un súbito incumplimiento por la Administración de sus compromisos y de su disconformidad con el modo en que se había actuado por las fuerzas de seguridad el día anterior- se tradujese en un acometimiento al agente envuelto en el incidente e inmediatamente a los demás agentes, lo que es reprochable penalmente y bajo cualquier punto de vista, pero que admite -en no menor medida que la tesis acusatoria- su consideración como un altercado puntual y temporalmente muy breve que no permite deducir el elemento subjetivo examinado.

En cuanto a otros datos circunstanciales que pudieran servir para calibrar la concurrencia del ánimo específico en la forma de alteración del orden acaecida, ya se ha expresado que la exhibición de palos u objetos contundentes es objeto de descripción de modo no coincidente por los agentes y su eventual peligrosidad, por su profusión o la seriedad del propósito de su empleo, no se aviene con la conducta de los agentes antes y después de la agresión antes referida, de modo que no permite discernir un propósito de alterar del modo sustancial y grave la convivencia. La profusión de expresiones insultantes o amenazadoras fue gráficamente descrita por varios de los testigos como la (lamentablemente) común en protestas similares, por lo que tampoco permiten inferir un ánimo de usar la violencia hacia los agentes como vehículo de reclamaciones colectivas, con el consiguiente grave quebranto de principios básicos de convivencia que el tipo imputado exige.

Por todo ello, procede la absolución de los acusados por la infracción imputada, lo que determina también la inaplicabilidad del art. 514.3 CP. que en la calificación de la acusación articulada por el Sr. GOMEZ, única que la postula, se refiere únicamente a la infracción de desórdenes públicos.

SEPTIMO- A- La acusación particular ejercitada en nombre de LUIS GOMEZ postuló la apreciación de la agravante de alevosía del art. 22.1 CP. Es una de las formas de la alevosía la agresión súbita, inopinada, sorpresiva, repentina o inesperada que deja a la víctima inerme e indefensa sin posibilidad de reaccionar frente al acto agresivo (STS 29-6-2000 ó 27-09-2001, entre muchas otras) y esta especie de la agravante no se ajusta plenamente a la sucesión de hechos que se reputan probados, puesto que las propias declaraciones del referido testigo aluden a que previamente a la producción de la agresión existió una situación de tirantez y tensión, plasmada en previos empujones, palabras de contenido amenazador y una discusión entre la víctima y uno de los agresores, por lo que pese a que ni el referido agente ni los demás integrantes del dispositivo hubieran adoptado especiales precauciones antes del desencadenamiento de la agresión y la misma fuera rápida y de intensa violencia, no cabe estimar que estemos ante unas circunstancias en las que la eventualidad de que la referida y palpable tensión desembocase en actos de agresión apareciese como remota ó no esperable hasta el punto de eliminar por completo la posibilidad de adoptar medidas de protección o defensa por la víctima, por lo que no procede su estimación.

B- Se postula por la misma parte la apreciación de la agravante de abuso de superioridad, que según jurisprudencia reiterada (STS 5/6/1995, 27/4/1996, 12/3/1998, 4/3/2002) exige la concurrencia de los siguientes requisitos: "1) Que haya situación de superioridad, es decir, un importante desequilibrio de fuerzas a favor de la parte agresora frente al agredido, derivada de cualquier circunstancia, bien referida a los medios utilizados para agredir (superioridad medial) bien al hecho de que concurra una pluralidad de atacantes, siendo precisamente este último supuesto el más característico y el de mayor frecuencia en su aplicación (superioridad personal)

2) Esa superioridad ha de ser tal que produzca una disminución notable en las posibilidades de defensa del ofendido, sin que llegue a eliminarlas, pues si esto ocurriera nos encontraríamos en presencia de la alevosía, que constituye así la frontera superior de la agravante que estamos examinando. Por eso la jurisprudencia mencionada viene considerando esta agravante como una "alevosía menor" o de "segundo grado".

3) A tales dos elementos objetivos hemos de añadir otro de naturaleza subjetiva, consistente en que haya abuso de esa superioridad, eso es, que el agresor o agresores conozcan esa situación de desequilibrio de fuerzas y se aprovechen de ella para una más fácil realización del delito.

4) Que esa superioridad de la que se abusa no sea inherente al delito, bien por constituir uno de sus elementos típicos, bien porque, por las circunstancias concretas, el delito necesariamente tuviera que realizarse así".

En el caso presente ha de apreciarse que la realización de la agresión por un grupo numeroso de personas que de forma

simultánea o sucesiva golpeaban al agente GOMEZ -únicos hechos a los que cabe extender la agravante en virtud del principio acusatorio- suponía una clara desproporción de fuerzas que disminuía de forma muy significativa las posibilidades de defensa por parte del mismo y también, al dirigirse simultáneamente la agresión contra todos los demás agentes próximos al mismo, dificultaba de manera decisiva la posibilidad de que el mismo fuera auxiliado por sus compañeros, siendo reiterados los testimonios de éstos en exponer que así lo intentaron y que no pudieron, a causa del acometimiento múltiple de que todos ellos eran objeto, liberar al Sr. GOMEZ de sus agresores, habiéndose ya referido cómo el Sr. YAÑEZ no pudo hacerlo respecto del procesado Sr. MONTOIRO que era una de las persona que al final del incidente golpeaba al Sr. GOMEZ. Esta superioridad numérica fue aprovechada para perpetrar la agresión y lesionar al agente Sr. GOMEZ y no puede ser considerada inherente al tipo penal aplicado, pues si bien es cierto que en el caso presente la situación de máximo estrés generada -con el concreto resultado lesivo consistente en la patología mental antes descrita- estuvo constituida por una agresión plural en la que la víctima se vio irremediabilmente perdida en manos de sus agresores, ello no es la única vía en que tal cuadro puede generarse y el mismo puede ser fruto, también, de una agresión en la que sin existir la desproporción de fuerzas que es el núcleo de la agravante postulada, su desarrollo llegue a producir la misma vivencia subjetiva traumática o catastrófica generada y la patología a ella anudada. La agravante (como la alevosía) ha de ceñirse al delito de lesiones, pues respecto del atentado la lesión del bien jurídico protegido es indiferente a las posibilidades de defensa de la autoridad o agente afectados por la acción delictiva.

C- Es doctrina reiterada que cabe la apreciación de circunstancias modificativas atenuantes de oficio aun cuando no hayan sido invocadas si resultare patente su concurrencia (STS 7 de octubre y 10 de diciembre de 1.992, 12 de septiembre de 1.994, 16 de julio de 2002) y estima esta Sala que el examen de la tramitación de la causa revela que la prolongación temporal del procedimiento resulta excesiva -cinco años casi exactos desde el acaecimiento de los hechos hasta la celebración del juicio- atendida la complejidad de la causa y que por ello, en aplicación de la doctrina jurisprudencial derivada del Pleno del TS de 21/5/99, plasmado en numerosas sentencias posteriores (8/6/99, 28/6/2000, 1/12/2001, 21/3/2002, 17/10/2002) procede compensar la entidad de la pena correspondiente al delito enjuiciado con la apreciación de la circunstancia atenuante analógica del art. 21.6 CP., que ha de considerarse (STS 2/1/2003) que no exige necesariamente o en todo caso la denuncia de la dilación por parte de la parte cuya responsabilidad se ve a la postre atenuada, siendo evidente que en las actuaciones la representación de los procesados actuó con la diligencia procesal adecuada proponiendo -y reiterando sus peticiones

no atendidas- las diligencias de investigación que estimó procedentes.

Así, el examen de la causa muestra que estando ya identificados los procesados como indiciarios autores de los hechos desde el mes de agosto de 1998 posterior a los hechos, la prosecución de la tramitación hasta que se fijó definitivamente el cuadro secuelar padecido por el principal lesionado en abril de 2000 resultaba inevitable, pero no cabe emitir la misma consideración sobre que en ese periodo no se hubieran llevado a cabo diligencias que aparecían como imprescindibles o convenientes para acotar los hechos y que por ello hubieron de realizarse con posterioridad, tales como recibir declaración al imputado MALLO LIÑARES, practicar su reconocimiento en rueda u examinar a uno de los policías lesionados, a lo que ha de añadirse que el ritmo de práctica de diligencias disminuyó sensiblemente desde la transformación de los autos en procedimiento ordinario, por lo que la práctica de nuevos trámites que ello implica no basta para estimar adecuado que la tramitación se dilatara hasta el mes de noviembre de 2001 en que los autos se remitieron a esta Sección. La revocación posterior del auto de conclusión de sumario para la práctica de nuevas diligencias y la prolongación de la tramitación de ello derivada ha de enlazarse con la ausencia de respuesta en fase sumarial a su proposición, que hubiera permitido una tramitación más breve, todo lo cual generó materialmente que hasta prácticamente un año después no se formularan las calificaciones por las acusaciones y que se señalara el juicio para el mes de julio posterior una vez practicadas las diligencias procesales oportunas y atendida la posibilidad de señalamientos de este órgano.

En definitiva, por varias incidencias procesales y cierta premiosidad en el ritmo de las diligencias el juicio se celebró más de tres años después de la fecha en que transcurrido el ya de por sí prolongado plazo para la sanidad del principal perjudicado e identificados los imputados estaban ya sustancialmente definidos los elementos necesarios para la precisión y formulación de las imputaciones, por lo que ha de estimarse que la duración del proceso excedió de la razonable o previsible y, por ello, implicó una lesión en bienes jurídicos tutelables, que a través de la apreciación de la simple atenuante -la ausencia de paralizaciones particularmente prolongadas impide darle mayor significado- analógica de dilaciones indebidas obtiene su adecuado reflejo en la fijación de la pena.

OCTAVO- A la hora de individualizar la pena estima esta Sala que la sanción de los delitos cometidos ha de fijarse en la mínima extensión legalmente prevista al tratarse de una sanción de notable severidad y deber tenerse en cuenta la ausencia de indicio alguno de peligrosidad apreciable en los acusados. En cuanto a la falta, la pluralidad de lesiones y de golpes propinados justifica que se imponga la pena privativa de libertad en su grado máximo postulada.

Cada una de las infracciones de lesiones castigadas se encuentran en una situación de concurso ideal (STS 22/3/2003, 25/9/2000, 21/1/2002) con el delito de atentado (un solo hecho natural comporta la infracción de varios preceptos penales y lesiona distintos bienes jurídicos) y ante tal concurrencia resulta más beneficioso para los acusados la punición por separado de cada uno de los delitos o faltas castigados (sanción de seis años de prisión para el delito de lesiones y de un año para el atentado) que la imposición de la pena más grave en su mitad superior (art. 77.2 CP) que determinaría una penalidad mínima de 9 años.

NOVENO- De conformidad con lo establecido por el artículo 109 del vigente Código Penal, toda persona criminalmente responsable de un delito o falta lo es también civilmente, siendo solidaria entre sí y frente al perjudicado la responsabilidad de los autores del hecho delictivo (art. 116.2 CP.)

Los informes médico-forenses ratificados en el juicio oral, además de la prueba de origen médico-sanitario aportada y en particular los informes y declaración del psiquiatra que atendió al lesionado Sr. GOMEZ, acreditan la extensión de los periodos de incapacidad temporal generados a los perjudicados cuyas lesiones son resarcibles en el presente procedimiento y las secuelas generadas, sin que haya existido prueba en sentido contrario que la desvirtúe.

La indemnización por día de incapacidad, siguiendo los criterios habitualmente empleados por esta Sala cuando de lesiones dolosas se trata, se fija en 60 euros diarios, cuantía ésta que ajusta a la derivada de las actualizaciones de la Ley 30/95, que si bien obviamente no es aplicable al caso, cuenta con un evidente poder orientativo dada su difusión y generalidad, estando justificado el incremento sobre la misma por el mayor daño moral inherente a la producción dolosa, frente a la imprudente o por riesgo a cuyo resarcimiento va primordialmente dirigida la norma referida. En atención al principio de congruencia la indemnización para el Sr. YAÑEZ no puede superar el importe más alto solicitado por las acusaciones (673 euros) para los catorce días de incapacidad producidos al mismo.

En cuanto a las secuelas producidas al Sr. GOMEZ (trastorno de stress postraumático, transformación persistente de la personalidad tras experiencia catastrófica, síndrome postconmocional), la intensidad de las repercusiones del cuadro psiquiátrico sobre el comportamiento, vida personal y familiar del lesionado y el sufrimiento generado, claramente descritos en los informes médicos y en las declaraciones prestadas en la vista, hacen estimar justificada la aplicación, cuando menos, de los 40 puntos que en el baremo de la Ley 30/95 se asocian al mayor de los síndromes psiquiátricos descritos asimilables a las secuelas padecidas, que en propiamente son distintas manifestaciones de un mismo problema.

La cuantía resultante de la aplicación de los baremos

actualmente vigentes -como corresponde a la naturaleza de deuda de valor- lleva a una cuantía aproximada de 50 mil euros, que estima esta Sala que no resarce la honda y severa incidencia negativa del suceso sobre la trayectoria vital del lesionado, que se ha visto truncada y perjudicada hasta el punto de que la víctima ha quedado prácticamente alienada de sí misma y sometida a una situación de sufrimiento moral permanente, por lo que estima esta Sala que la suma referida ha de incrementarse en un 50%.

A ello ha de añadirse que la incidencia negativa de las secuelas sobre capacidades tales como la atención, concentración, memoria inmediata, orientación, tolerancia al estrés y control de la agresividad, implica que el cuadro secuelar afecta de forma decisiva a la aptitud del lesionado para desempeñar las ocupaciones de su profesión de policía, aún cuando se trate de funciones en las que no se porten armas, lo que fue claramente expresado por el psiquiatra que lo trata y es compatible con la declaración de minusvalía y la situación de segunda actividad por insuficiencia de sus aptitudes psicofísicas en que se halla. En consecuencia, se estima procedente añadir a la indemnización básica una indemnización que resarza la incapacidad permanente total que se ha producido, que dentro de los márgenes que la Tabla IV se ha de fijar en su ámbito superior (50.000 euros).

Por ello, se fija en concepto de daños y perjuicios la suma de 156.620 euros.

Se ha acreditado la producción de gastos farmacéuticos médicos por la asistencia al Sr. GOMEZ y las manifestaciones del psiquiatra que lo atiende ratifican la persistencia de tal tratamiento, pero al haberse aportado extemporáneamente justificaciones documentales de los mismos -lo que provocó su inadmisión en el acto del juicio- procede remitir a la fase de ejecución de sentencia, de forma contradictoria, la fijación del importe al que a tal momento liquidatorio se extienda su cuantía.

DECIMO- De acuerdo con el art. 117 CP los aseguradores que hubieren asumido el riesgo de las responsabilidades pecuniarias derivadas de determinadas actividades cuando, como consecuencia de un hecho delictivo, se produzca el evento que determine el riesgo asegurado, serán responsables civiles directos hasta el límite de la indemnización legalmente establecida o convencionalmente pactada. El perjudicado Sr. GOMEZ ha pedido la declaración de responsabilidad civil del Consorcio de Compensación de Seguros y en el juicio precisó que ello derivaba de la cobertura por tal organismo de los riesgos extraordinarios de motín o tumulto popular, subsanándose así la indeterminación del escrito de acusación sobre la causa jurídica de la pretensión indemnizatoria, que en todo caso no originó indefensión a dicho organismo que rebatió en su escrito de defensa tal previsible sustento de la petición. El artículo 6 del Estatuto del Consorcio, aprobado por Ley de 19/12/1990 y sus modificaciones posteriores, considera indemnizables por el Consorcio los daños directos en

personas derivados de acontecimientos extraordinarios entre los que se incluyen los ocasionados violentamente como consecuencia de motín y tumulto popular, pero ello ``en régimen de compensación`` y en consecuencia la obligación indemnizatoria se limita a ``los asegurados que, habiendo satisfecho los correspondientes recargos -regulados en el art. 7- en favor de aquél`` (art. 8.1), y por ello ``amparará necesaria y exclusivamente a las mismas personas o bienes y por las mismas sumas aseguradas que se hayan establecido en las pólizas de seguro`` (art. 9,2). Es evidente con arreglo a esta normativa, e inherente a la propia naturaleza de la cobertura de los riesgos extraordinarios, que ésta presupone la celebración de un previo contrato entre el perjudicado y una entidad privada y que se hubieran abonado en los recibos de prima los recargos legales establecidos, sin que la sentencia invocada por la acusación (Sala 1ª TS 22/11/2000) en absoluto permita deducir un criterio interpretativo contrario, pudiendo invocarse en sentido opuesto las STS Sala 1ª 5/2/1991, 22/7/1991 ó 24-11-1992 en las que es presupuesto de la responsabilidad del Consorcio la previa existencia de una póliza que asegure la pérdida producida. En el caso presente ninguna voluntad ha tenido la parte perjudicada de acreditar la existencia de una póliza de seguro de accidentes que amparase los daños personales que pudiera sufrir el lesionado y que no cubriese (como el art. 8.3 sí permite en adecuación a la normativa comunitaria) los originados por eventos como el acaecido, y ello aún pese a las alegaciones en tal sentido contenidas en el escrito de defensa del Consorcio, por lo que su pretensión indemnizatoria frente a tal organismo ha de ser desestimada.

UNDECIMO- En cuanto a las costas producidas ha de atenderse al criterio de reparto en razón a los delitos imputados distribuyendo luego la parte correspondiente entre los distintos condenados (STS 9/10/1997 y 19/11/2002). Se imputan un delito de atentado, un delito de lesiones y un delito de desórdenes públicos y al ser tres los condenados por las dos primeras infracciones, les corresponde a cada uno de ellos el pago de dos dieciochoavas partes del total de las costas, debiendo declararse el resto de oficio, de conformidad con los arts. 239 y 240 LECR. y 123 y 124 CP. Las mismas incluirán los honorarios de las acusaciones particulares en aplicación de la doctrina jurisprudencial consolidada (STS 26.11.97, 16.7.98, 15.4.99, 9.12.99, 22.9.00) que establece que la exclusión de las costas de la acusación particular únicamente procederá cuando su actuación haya resultado notoriamente inútil o superflua o bien haya formulado peticiones absolutamente heterogéneas respecto de las conclusiones aceptadas en la sentencia, lo que no es el caso pues ha habido convergencia entre las imputaciones de las distintas acusaciones, su legitimación para ejercitarlas era evidente al tratarse de personas directamente ofendidas por los actos delictivos y las decisiones absolutorias adoptadas no responden a

pretensiones que quepa considerar infundadas o temerarias, lo que es también atribuible a la pretensión indemnizatoria dirigida frente al CONSORCIO DE COMPENSACION.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación, de conformidad con el artículo 117 de la Constitución, en nombre de S.M. el Rey, por la autoridad conferida por el Pueblo español,

F A L L A M O S

1- Que debemos condenar y condenamos a SIMON MARQUEZ VALLE, a JOSE MOREIRA FERNANDEZ y a JESUS MONTOIRO CEPEDA como autores responsables de un delito de lesiones, con la concurrencia de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal de abuso de superioridad y analógica de dilaciones indebidas, a la penas, a cada uno de ellos, de 6 años de prisión e inhabilitación especial durante el tiempo de la condena y a que indemnicen solidariamente a LUIS GOMEZ VAZQUEZ en 156.620 euros. y en la cantidad que por gastos médicos y farmacéuticos derivados de las lesiones y secuelas producidas se fije en ejecución de sentencia.

2-Igualmente condenamos a SIMON MARQUEZ VALLE, a JOSE MOREIRA FERNANDEZ y a JESUS MONTOIRO CEPEDA como autores responsables de un delito de atentado, con la concurrencia de la circunstancia atenuante analógica de dilaciones indebidas, a las penas, a cada uno de ellos, de 1 año de prisión e inhabilitación especial durante el tiempo de la condena.

3-Condenamos también a JESUS MONTOIRO CEPEDA como autor de una falta de lesiones a la pena de 6 fines de semana de arresto y a que indemnice a HORACIO YAÑEZ FERNANDEZ en 673 euros.

4-Absolvemos a SIMON MARQUEZ VALLE, a JOSE MOREIRA FERNANDEZ, a JESUS MONTOIRO CEPEDA, a ROBERTO MALLO LIÑARES, a AUGUSTO GOMEZ MALLO y a JAIME BEIROA FIGUEIRAS, del resto de delitos y faltas por los que han sido acusados y al CONSORCIO DE COMPENSACION DE SEGUROS de las pretensiones de declaración de responsabilidad civil que frente al mismo se han formulado.

5-Se imponen a SIMON MARQUEZ VALLE, a JOSE MOREIRA FERNANDEZ y a JESUS MONTOIRO CEPEDA sendas condenas de pago de la novena parte del total de las costas procesales, en el que se incluirán las generadas por ambas acusaciones particulares, declarándose de oficio el resto de las costas.

Notifíquese esta Sentencia a los acusados personalmente, y a las demás partes, haciéndoles saber que pueden interponer recurso de casación, preparándolo ante esta Sala dentro de los cinco días siguientes al de la última notificación de esta resolución

Así por esta nuestra sentencia de la que se pondrá certificación literal en el Rollo de su razón, incluyéndose el original en el Libro de Sentencias, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.-